

28597

SISTEMA FEDERAL
DE PREVISION SOCIAL
PRIMER INFORME PARCIAL

CATALOGADO

0

M. 413

S 115

I



ANOTACIONES SOBRE EL CONJUNTO DE PROPOSICIONES COMO AVANCE DE LA ETAPA 3 DEL ESTUDIO: SISTEMA FEDERAL DE PREVISION SOCIAL QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO DEL CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR - C.F.I.

1) - Consideraciones previas:

El PROPOSITO de estos apuntes es efectuar diversas consideraciones sobre la necesidad de encontrar soluciones viables para los problemas que están planteados en los regímenes de previsión social argentinos que, siendo una pesada carga para las finanzas provinciales, son actualmente insuficientes para dar adecuada respuesta a las necesidades vitales de la población.

Cabe tener presente que la Etapa 3 del Plan de Trabajos -que de acuerdo con el cronograma establecido deberá iniciarse a principios del mes de abril próximo -obliga a realizar un análisis para estructurar un conjunto de proposiciones relativas a un sistema federal de previsión social con alcance nacional, que permita:

- Centralizar normativamente el sistema previsional argentino, a través de normas básicas sobre el programa de prestaciones previsionales de los distintos organismos;
- Descentralizar operativamente en los aspectos económico-financieros, así como en lo atinente a la aplicación, ejecución, reglamentación y adecuación a las necesidades regionales, de las normas dictadas en función del punto anterior;
- Determinar el proceso de la descentralización operativa en cada jurisdicción de los organismos actuales;
- Adecuar el soporte económico financiero del sistema a instrumentar, a fin de garantizar una oportuna y eficaz administración de los recursos de los respectivos entes previsionales involucrados;
- Estructurar un mecanismo de compensación interjurisdiccional que posibilite la atención de déficits coyunturales, bajo condiciones de funcionamiento equitativo y que resguarden el equilibrio y consolidación a largo plazo del sistema en general.

En oportunidad de la 1ra. reunión con los representantes provinciales realizada el 10/12/82 en la sala de reuniones del C.F.I., se distribuyó un documento en el que se esbozó el panorama de los regímenes previsionales, cuya situación preocupa al Estado, no sólo en las áreas de manejo social, sino también en las relacionadas con la administración presupuestaria y económico financiera en general.

En dicha oportunidad se completó el panorama mencionado con la presentación de datos de la evolución demográfica del país con decisiva influencia en aspectos estructurales de la previsión social recurriéndose a:

- 1) las cifras de la esperanza de vida para distintas edades en los períodos 1960/65 y 1975/80;
- 2) La desfavorable evolución de la distribución de la población por grupos de edades en el período 1950/80;
- 3) la proyección de la población de 1980 al año 2025 por sexo y grupos de edades que pasa de la forma de pirámide en 1980 a una figura rectangular en las edades jóvenes para el año 2025.

Dichos datos están disponibles en virtud de los trabajos de CELADE - INDEC (Estimaciones y Proyecciones Población 1950/2025).

Otro aspecto importante abordado en la disertación efectuada, como consecuencia de aspectos relevantes planteados por los representantes provinciales al tocar el tema de la relación entre los aportes y los beneficios

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

es el de sistemas de financiamiento de los regímenes previsionales. Se aclaró que el estudio al referirse a la financiación de los regímenes de protección social de los riesgos de vejez, invalidez y muerte que alcanzan en la actualidad a toda la población del país, no propugnará un régimen de capitalización puesto que ya a principios de la década de los años cincuenta los especialistas habían agotado la estéril polémica "capitalización" versus "reparto".

Del intercambio de opiniones realizado en el mes de diciembre ppdo., además de lo puntualizado debe resaltarse:

a) la preocupación por encauzar los distintos regímenes de previsión social vigentes en el país tanto en épocas de inflación como para el caso de estabilidad monetaria;

b) lo negativo que ha sido para las finanzas provinciales la aplicación del régimen de reciprocidad y la necesidad de analizar un mecanismo de coparticipación en el pago de beneficios;

c) la necesidad de mejorar determinados aspectos del sistema previsional;

d) el temor a que se repita en materia de previsión social lo acaecido en los casos de las transferencias a las provincias de la educación primaria, obras sanitarias, etc.;

e) la conveniencia de conocer, luego de finalizada la Etapa 1 del estudio, un anticipo de las proposiciones más destacables que habrán de desarrollarse en la Etapa 3 para ser puestas a consideración de los organismos provinciales pertinentes a fin de recoger las observaciones y críticas -con anterioridad al mes de mayo próximo- en virtud de la responsabilidad que significa cualquier modificación que en definitiva se aconseje y para evitar la creación de expectativas erróneas sobre sus fines y posibilidades.

II) - Propuestas:

1- Las propuestas que aquí se exponen reconocen como premisas:

a) la adopción de medidas de carácter social no debiera estar supeditada a que previamente se acondicione la economía. Antes bien reconociendo la interrelación que existe entre la política económica y la social, las decisiones debieran ser tomadas en forma simultánea y progresivamente. La adopción de medidas que tiendan a racionalizar, optimizar y complementar los regímenes previsionales vigentes es ineludible.

b) el comportamiento del aparato productivo del país ha de recuperarse en forma paulatina en los próximos años, y enérgicamente en el mediano y largo plazo, con la perspectiva de que el esfuerzo común sea destinado a todos los habitantes.

c) los desajustes y distorsiones que presenta actualmente el "sistema argentino de previsión social" -en su conjunto- ofrecen una perspectiva que irá agravándose progresivamente en el futuro, y se refieren a normas que lo rigen, eficacia de las prestaciones, aspectos del financiamiento, estructuras organizativas e infraestructuras administrativas. Dichos desajustes y distorsiones no pueden solucionarse en el breve plazo, pero las medidas deben tomarse de inmediato, con efectos y objetivos de corto, mediano y largo plazo.

2- Las propuestas tienen por objeto y estarán orientadas a:

a) estructurar un sistema de previsión social, con alcance nacional, armónicamente integrado a los programas sociales y de desarrollo económico general del país;

b) limitar o acotar aspectos negativos (tales como: déficit económico financiero y deterioro de las relaciones demográficas) y evitar que éstos perduren y se incrementen indefinidamente, esto es, poner bajo un más estricto control todo el sistema;

c) establecer incentivos o estímulos destinados a que, voluntariamente, las personas comprendidas opten por regímenes que ayuden a mejorar los efectos favorables de las medidas que se propongan para lograr los objetivos anteriores;

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

d) procurar la máxima equidad para todos los participantes en la financiación de los programas de previsión social (vigentes y a crearse) en función de las aspiraciones de las personas amparadas -actuales y futuras- y, de las reales posibilidades de la economía.

3- El conjunto de proposiciones se presentará subdividido en tres grupos de propuestas:

A- las relativas al ordenamiento jurídico básico;

B- propuestas vinculadas específicamente con el ordenamiento económico-financiero y del contralor de las variables críticas;

C- proposiciones respecto de algunas pautas para el ordenamiento de las estructuras organizativas y de apoyo administrativo.

Respecto al Grupo A, se supone que una ley de alcance y aplicación en todo el ámbito nacional, definirá la instrumentación del sistema argentino de previsión social -cobertura de las prestaciones en casos de invalidez, vejez y muerte- con una estructura normativa que permita organizar:

- el nivel universal; básico, obligatorio y que involucre a todos los habitantes del país, mayores a una edad límite;
- el nivel solidario, obligatorio y complementario del nivel anterior para los habitantes del país agrupados según sea determinado legislativamente, por: sectores, actividades, ocupaciones, jurisdicciones, áreas geográficas, etc.;
- el nivel de los copartícipes sociales, optativo, con estructuras jurídicas diversas, pero con actividades supervisadas por el Estado.

Respecto al Grupo B, se parte de un régimen financiero, que deberá garantizar el pago puntual de las actuales prestaciones y de las que sean consecuencia del sistema a instrumentarse y que contemplará:

- para el nivel universal, el financiamiento a través de la participación de las personas comprendidas en ejercicio de sus actividades, así como de la afectación específica de recursos provenientes de la recaudación impositiva total, con alcance nacional. El aporte será obligatorio y se establecerán límites para la participación de la comunidad, de acuerdo con la política general del sistema que se diseñe.
- para el nivel solidario, el aporte obligatorio e individualizado de las personas comprendidas y la participación de quienes concurren en el desempeño de las actividades, según el agrupamiento que la legislación estructure. El aporte podría ser fijado en función de alternativas que flexibilicen variantes de opciones, en consonancia con los haberes de las prestaciones. Como parámetro inicial sería del caso establecer que, el aporte o su equivalente a establecerse no debiera resultar superior a la mitad del que corresponda para el financiamiento del nivel universal.
La participación de los empleadores, dadores de trabajo o de quienes recurren al ejercicio de actividades profesionales y asimilables (computando las retenciones en las fuentes donde se manifiesta estas actividades) debiera prever, como "cota de mínima", el equivalente a la mitad de los recursos provenientes del aporte directo de las personas comprendidas.
- el financiamiento del nivel de los copartícipes sociales debiera estar asumido íntegramente por las personas que participen voluntariamente en cada entidad. Estas personas -físicas y jurídicas- podrían estar incentivadas a participar a través de un especial tratamiento impositivo. No habría impedimento para que una misma persona física y jurídica participe en el financiamiento de una o más entidades administradoras de regímenes pertenecientes a este nivel. El aporte de la persona física no tendría parámetros -ni de mínima, por cuanto sería todo aquel esfuerzo que supere los límites resultantes de los niveles anteriores-, en tanto que para las personas jurídicas bien podría predeterminarse una "cota de máxima" (en función del total de salarios pagados, o del valor agregado, o de los costos totales o, incluso, de una combinación de estos valores).

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En este punto también deben considerarse aquellas cuestiones que hacen al efectivo control y seguimiento de las variables críticas del sistema a instrumentarse. El estancamiento, retroceso o crecimiento del Producto Bruto Interno, la distribución de los ingresos entre los factores de la producción, las modificaciones en la estructura productiva, las migraciones internas y externas, la evolución de las tasas de mortalidad, de la fecundidad, de interés, de ocupación y subocupación, de inflación, etc., constituyen factores insoslayables en el análisis de coyuntura y prospectivo, al momento de evaluar el encuadre y comportamiento de los programas integrantes del sistema de previsión social.

Respecto al Grupo C -ordenamiento de las estructuras organizativas y de apoyo administrativo- se considera que la Nación Argentina, asume la responsabilidad integral del Sistema Federal de Previsión Social.

Las Provincias se comprometen a organizar, administrar y controlar, en sus respectivos ámbitos, las entidades y los regímenes estructurados para viabilizar el sistema. Para ello, deberán:

- encargar a los actuales organismos de previsión social (con flexibilidad suficiente para utilizar los que operen en municipalidades) la aplicación -en el ámbito de cada jurisdicción- del nivel universal, básico y obligatorio para todos sus habitantes. Serán responsables del pago de la nómina de beneficiarios -actuales y a incorporarse en el futuro-, así como de la percepción oportuna de los respectivos recursos. Los desequilibrios coyunturales o estructurales deberán ser motivo de especial tratamiento y para su discernimiento será oportuno armonizar las decisiones que se adopten en el futuro en materia de coparticipación impositiva (una óptima combinación de parámetros a utilizar debiera contener indicadores aptos para que plasmen las distintas realidades provinciales).
- dictar y reglamentar las legislaciones -en su caso, resolver la adecuación de las existentes- que permitan instrumentar el nivel solidario, obligatorio y complementario del anterior. Se podría establecer dos diferentes plazos: uno, que sería breve, para instrumentar la cobertura de los grupos de habitantes con manifiestas potencialidades, y otro, de mediano plazo para cumplimentar a cabalidad la cobertura de todos los habitantes, en las condiciones establecidas por la legislación respectiva. Los actuales regímenes locales que amparan a personas dedicadas a determinadas actividades profesionales son las plataformas idóneas para ensanchar las posibilidades de instrumentar este nivel.
- adoptar las normas, reglamentaciones, y especificaciones suficientes para la plena vigencia de regímenes que se decida instrumentar en el nivel de los copartícipes sociales; tales como mutuales, cooperativas, sociedades, fundaciones, creadas o a crearse. Las entidades que asuman la aplicación de estos regímenes estarán facultadas para fijar su propio soporte financiero, definir el alcance y nivel de las prestaciones, así como la opción entre una administración directa o indirecta, llegándose incluso a permitir acciones de intermediación (siempre bajo el control de una persona ideal, a través del Estado).
- Finalmente, la administración de justicia por los juicios planteados en su jurisdicción, en los términos previstos por el inciso 11 del artículo 67º de la Constitución Nacional (con las modificaciones del año 1957).

Por lo dicho se propondrán esquemas de administración del sistema que comprendan definiciones sobre los procesos de planificación, ejecución y control en las diferentes jurisdicciones con el objeto de asegurar la correspondencia de objetivos con los del desarrollo económico-social, la eficiencia de la gestión y el equilibrio económico-financiero permanente.

En mérito a las propuestas indicadas se reformularán los métodos de determinación del haber de las prestaciones sin adoptar modelos extraños pero tomando en consideración tanto el principio de adecuación de las prestaciones como el principio del seguro cuando corresponda, de tal forma que se pueda hacer más equitativa la distribución de los recursos en función de las contingencias a cubrir pero teniendo en cuenta también otras variables del comportamiento de los beneficiarios durante su vida activa. Todo ello coordinado en el esquema de los tres niveles que se describiera y partiendo de la situación de que existirán afiliados y beneficiarios anteriores y posteriores a la vigencia de las eventuales reformas, que deberán contemplar los legítimos intereses en juego..

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

La vigencia y operación de los tres niveles mencionados permitirá sin duda, dar el carácter universal a la cobertura previsional para así poder avanzar, perfeccionando los regímenes con otras prestaciones de la seguridad social complementarias a las jubilaciones y pensiones, tanto para las prestaciones ya concedidas como para las que se otorguen en el futuro.

III)-Consideraciones Finales:

1. Para una población económicamente activa al año 1980 de 11.000.000 según estimación en base al censo de ese año existen más de 2.800.000 jubilaciones y pensiones (10 o/o de la población total del país) de los cuales 400.000 corresponden a regímenes establecidos por las jurisdicciones provinciales.
2. Estas cifras y la más probable evolución de la población argentina -según estimaciones que se disponen hasta el año 2025- permiten sostener la oportunidad de producir en la presente década una profunda reorganización del sistema de previsión social argentino que, como se afirmara al principio, constituye una pesada carga sobre todo para la economía y finanzas de las Provincias Argentinas.
3. También es oportuno plantear distintas alternativas en el corriente año 1983, teniendo presente el vencimiento que se opera al fin de este año del régimen de coparticipación federal impositiva y la importancia que desde la reforma del año 1980 éste tiene en el financiamiento de la previsión social argentina.
4. Los planteos que se efectúen deben considerar la necesidad de armonizar las distintas políticas que se interrelacionan con la previsión social, tales entre otras: del resto de la seguridad social, de los sistemas financiero, de seguros y reaseguros, impositivo, del financiamiento de viviendas, etc.
5. La premisa fundamental del estudio y las proposiciones que en definitiva se efectuarán al término del mismo consisten en reemplazar la presente coexistencia de los distintos regímenes previsionales vigentes en el país por la libre cooperación entre ellos y los que se desarrollen en el futuro dentro del "Sistema Federal de Previsión Social" y para ello se cuenta con una rica experiencia nacional y extranjera que evitará caer en errores conceptuales y de instrumentación a los efectos de que el sistema no sea una carga para el desarrollo nacional sino todo lo contrario, esto es, que el flujo de fondos de la previsión social contribuya positivamente en dicho proceso de desarrollo y beneficie a todos los habitantes del país.

LA PLATA, 28 de Febrero de 1983.

CAPITULO I

ESTRUCTURA JURIDICA DE LOS REGIMENES VIGENTES

Este capítulo es una síntesis de la información normativa compilada en el desarrollo de la Etapa 1, referida a 88 regímenes correspondientes a programas de cobertura para la invalidez, la vejez y la muerte, administrados por 56 organismos de previsión social vigentes en 23 jurisdicciones (22 Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires).

No ha sido posible incluir en el análisis los regímenes pertenecientes a los 11 Organismos que se detallan a continuación:

- 1 - Caja de la Municipalidad de San Salvador (Entre Ríos).
- 2 - Caja Notarial (Entre Ríos).
- 3 - Caja de la Municipalidad de Santa Fe (Santa Fe).
- 4 - Caja Notarial (Santa Fe).
- 5 - Caja de Previsión Social de la Ingeniería Primera Circunscripción (Santa Fe).
- 6 - Caja de Previsión Social de la Ingeniería Segunda Circunscripción (Santa Fe).
- 7 - Caja de Previsión Social de Profesionales del Arte de Curar (Santa Fe).
- 8 - Caja de la Municipalidad de Tucumán (Tucumán).
- 9 - Caja Notarial (Tucumán).
- 10 - Caja de Previsión Social para Escribanos (San Luis).
- 11 - Caja Forense (Río Negro).

El análisis se efectuó adoptando la siguiente clasificación temática:

1. **NATURALEZA JURIDICA.**
2. **ORGANO DE CONDUCCION.**
3. **AMBITO DE APLICACION.**
4. **RECURSOS DEL REGIMEN.**
 - 4.1. Aporte Personal
 - 4.2. Contribución Patronal.
 - 4.3. Otros Recursos.
 - 4.4. Remuneraciones.
 - 4.5. Percepción de fondos.
 - 4.6. Régimen financiero e inversiones.
 - 4.7. Gastos de Administración.
 - 4.8. Cargos deudores.
 - 4.9. Fondo de reserva.
 - 4.10. Acción de cobro.
 - 4.11. Revisión actuarial.
 - 4.12. Contribución a otros programas sociales.
5. **PRESTACIONES.**
 - 5.1. Tipo.
 - 5.2. Generalidades y características.
 - 5.3. Requisitos.
 - 5.4. Conservación de derechos.
 - 5.4.1. Compatibilidad.
 - 5.4.2. Reintegros.
 - 5.4.3. Límites para pensión.
6. **DETERMINACION DEL HABER.**
7. **MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES.**
8. **COMPUTO DE SERVICIOS.**
 - 8.1. Régimen de reciprocidad.
 - 8.2. Servicios fictos - compensación de exceso de edad por servicios.
 - 8.3. Adhesión a convenios internacionales.
9. **RECURSOS**

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En los cuadros A, B y C que se presentan a continuación, los regímenes aludidos han sido agrupados en tres sectores. A - el que comprende al personal en relación de dependencia del sector público provincial y municipal, B - el que comprende al personal con estado policial y de seguridad (cuando alcanza al personal asimilado: penitenciario) y C - el que comprende a personas dedicadas a actividades profesionales.

Para el primero de los sectores se aprecia una moderada uniformidad con las pautas del régimen nacional que ampara a los trabajadores en relación de dependencia, con particularidades en algunas especificaciones que tienen alcance regional (pensión a la concubina; incremento del 5 o/o por cada copartícipe; carencia del requisito de límite de edad para la jubilación ordinaria, entre otras).

En los dos restantes sectores las diferencias son más significativas especialmente en cuanto se refiere a los regímenes que amparan a profesionales y en lo que respecta a las disposiciones de la Ley Nro. 18.038.

CUADRO A

APORTES Y CONDICIONES EXIGIDAS PARA LA JUBILACION ORDINARIA
EN REGIMENES QUE AMPARAN AL PERSONAL DEL
SECTOR PUBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL

REGIONES JURISDICCIONES ORGANISMOS	SERVICIOS COMUNES				SERVICIOS DOCENTES				
	Aportes (o/o)	EDAD		Años de Ser- vicios	Minimo con Aportes (1)	Aportes (o/o)	EDAD		Años de Ser- vicios
		Varón	Mujer				Varón	Mujer	
REGION I									
- BUENOS AIRES									
- I.P.S.	13	60	60	35	22	15	55	55	30 (2)
- C.J.S. y P. Banco Provincia.	15	50	50	30	---	---	---	---	---
- LA PAMPA									
- I.S.S.	8	60	55	30	20	10	S.L.	S.L.	30*(2)
- MUNICIPALIDAD CIUDAD DE BUENOS AIRES									
- I.M.P.S.	11	60	55	30	15	18	55	52	30*(2)
REGION II									
- CORRIENTES									
- I.P.S.	13,5	60	55	30	---	15,5	60	55	30 (3)
- CHACO									
- I.P.S.	11	60	55	30	15	14	52	50	30*(2)
- ENTRE RIOS									
- C.J. y P.	12	60	55	30	15	13	55	52	30 (2)
Municipalidades de:									
- Basavilbaso									
- C.J. y P.	12	50	50	30	15	---	---	---	---
- Galeguay									
- C.J. y P.	10	60	55	30	---	---	---	---	---
- Gualaguaychú									
- C.M.J. y P.	12	55	50	30/27(4)	---	---	---	---	---
- San Salvador	No hay datos disponibles.								
- Villa Elisa									
- C.J.P. y R.	10	60	55	25	---	---	---	---	---

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES**CUADRO A** (Continuación)

REGIONES JURISDICCIONES ORGANISMOS	SERVICIOS COMUNES				Años de Ser- vicios	Minimo con Aportes (1)	SERVICIOS DOCENTES			
	Aportes (o/o)	EDAD		Aportes (o/o)			EDAD		Años de Ser- vicios	
		Varón	Mujer				Varón	Mujer		
- FORMOSA - C.P.S.	7	60	55	30	20	10	55	52	25 *	
- MISIONES - I.P.S.	5	60	55	30	22	13	55	52	30 (2)	
- SANTA FE - C.P.S. Pcia.	13	60	55	30	23	18	60	55	30 (5)	
Municipalidades de:										
- Esperanza C.M.P.S.	13	50	47	30/27(4)	---	---	---	---	---	
- Cañada de Gómez - C.J. y P.	12	60	55	30	---	---	---	---	---	
- Rufino C.M.J. y P.	12	55	50	30	---	---	---	---	---	
- Rosario I.M.P.S.	14	60	55	30	---	---	---	---	---	
- Santa Fe	No hay datos disponibles.									
- Venado Tuerto - C.J. y P.	10	60	55	30	22	---	---	---	---	
REGION III										
- CATAMARCA - I.P.P.S.	11	60	55	30	15	11	55	52	30*(2)	
- JUJUY - I.P.P.S.	12	60	55	30	20	14	55	52	30 (2)	
- SALTA - C.P.S.	13	60	55	30	15	14	55	52	30 *	
- SGO.DEL ESTERO - I.S.S.	13	60	55	30	15	14	55	52	30*(2)	
- TUCUMAN - I.P.S.S.	12	60	55	30	15	14	55	52	25*(2)	
- Municipalidad de Tucumán	No hay datos disponibles.									

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO A (Continuación)

REGIONES JURISDICCIONES ORGANISMOS	SERVICIOS COMUNES				Años de Ser- vicios	SERVICIOS DOCENTES				Años de Ser- vicios
	Aportes (o/o)	EDAD		Mínimo con Aportes (1)		Aportes (o/o)	EDAD			
		Varón	Mujer				Varón	Mujer		
REGION IV										
- CORDOBA - C.J.P. y R.	12,5	58	55	30	23	14,5	53	50	25 *	
- LA RIOJA - I.P.S.A.S.	13	60	55	30	23	15	55	52	30*(2)	
- MENDOZA - C.J. y P.	11	62	62	30	---	14	55	52	30 (2)	
- SAN JUAN - C.J. y P.	12	60	55	30	15	14	55	52	30*(2)	
- SAN LUIS - I.P.S.	13	60	55	30	15	15	55	52	30 (2)	
REGION V										
- CHUBUT - I.S.S. y S.	10	55	55	30	22	10	S.L.	S.L.	30*(2)	
- NEUQUEN - I.S.S.	7	60	55	30	15	8	55	52	30*(2)	
- Municipalidad de Neuquén - I.M.P.S.	5	60	55	30	15	---	---	---	---	
- RIO NEGRO - C.P.S.	11	60	55	30	15	13	55	52	30 (2)	
- SANTA CRUZ - C.P.S.	8	57	52	30/27 (4)	15	10	S.L.	S.L.	25 (6)	

(1) No de años exigidos para demandar jubilación ordinaria, cualquiera sea la clase de servicios a computar.

(2) Si se computan diez (10) años al frente directo de alumnos se reduce la cantidad de años exigidos.

(3) Por cada cuatro (4) años de servicios docentes se bonifica con un año más de servicios.

(4) Diferenciados por sexo; antes de la barra: varones.

(5) Por cada cinco (5) años de servicios docentes se bonifica con un año más de servicios y se exige un año menos de edad.

(6) Deben computarse por lo menos diez (10) años al frente de grado.

Nota: La abreviatura S.L. indica: sin límite de edad.

* Autorizan reconocimiento de servicios por declaración jurada.

CUADRO B

APORTES, CONTRIBUCIONES Y CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL
RETIRO VOLUNTARIO EN REGIMENES QUE AMPARAN AL
PERSONAL DE SEGURIDAD

REGIONES Y PROVINCIAS	Aportes (o/o)	Contribu- ciones (o/o)	Condiciones Retiro Voluntario			
			Personal Superior	Años de Servicios	Personal Subalterno	Años de Servicios
			Edad		Edad	
REGION I						
Buenos Aires	18	20	S.L.	25	S.L.	25
La Pampa	14	20	S.L.	25	S.L.	25
REGION II						
Corrientes	15,5	17	S.L.	25	S.L.	25 (1)
Chaco	14	16	S.L.	17	S.L.	17
Entre Ríos	15	18	S.L.	25	S.L.	20 (1)
Formosa	No hay datos disponibles.					
Misiones	13	16	S.L.	25	S.L.	20
Santa Fe	15	20	S.L.	20	S.L.	20
REGION III						
Catamarca	13	18	S.L.	25	S.L.	22
Jujuy	No hay datos disponibles.					
Salta	17	18	45	25	40	20
Sgo. del Estero	16	17	50	25	50	20 (1)
Tucumán	16	20	S.L.	25	S.L.	25
REGION IV						
Córdoba	15	21	S.L.	25	S.L.	22
La Rioja	17	21	S.L.	25	S.L.	22
Mendoza	16	21	S.L.	22	S.L.	22 (2)
San Juan	16	(3)	S.L.	20	S.L.	20
San Luis	15	17	55	30	55	30 (4)
REGION V						
Chubut	13	16	S.L.	30	S.L.	25
Neuquén	13	16	S.L.	25	S.L.	20
Río Negro	13	18	S.L.	25	S.L.	25 (1)
Santa Cruz	10	15	S.L.	25	S.L.	20 (1)

(1) Si se computan servicios policiales, exclusivamente, se exige menor cantidad de años de servicios.

(2) Personal del Cuerpo de Seguridad.

(3) Las diferencias entre aportes personales y erogaciones se cubren con fondos del Tesoro Provincial.

(4) Límites para la jubilación ordinaria. No tienen un régimen de "Retiros Policiales".

Nota: La abreviatura S.L. indica: sin límite de edad.

CUADRO C

**APORTES Y CONDICIONES EXIGIDAS PARA LA JUBILACION ORDINARIA EN LOS
REGIMENES QUE AMPARAN PERSONAS DEDICADAS A
DETERMINADAS ACTIVIDADES PROFESIONALES**

REGIONES PROVINCIAS ORGANISMOS	Aportes sobre Honorarios (o/o)	Requisitos para la Jubilación Ordinaria (Ambos Sexos) Edad	Años de Servicios
REGION I			
BUENOS AIRES			
- C.P.S. Abogados	7	55	25
- C.P.S. Escribanos	(1)	55	30
- C.P.S. Ingenieros	10	55	25
- C.P.S. Martilleros	10	55	30
- C.P. y S. Médico	(2)	58	30
- C.P.S. Odontólogos	(2)	60	30
- C.P.S. Procuradores	6	55	25
LA PAMPA			
- C. Forense	15	65	20
REGION II			
CHACO			
- C. Forense	10	60	30
- C. Notarial	20	60	30
ENTRE RIOS			
- C.P.S. Ingeniería	10	60	25
- C. Notarial	No hay datos disponibles.		
SANTA FE			
- C.P.S. Abogados y Procuradores	(2)	60	30
- C.P.S. Arte de Curar	No hay datos disponibles.		
- C.P.S. Ingeniería (1ra. y 2da. Circunc.)	No hay datos disponibles.		
- C. Notarial	No hay datos disponibles.		
REGION III			
SALTA			
- C.P.S. Abogados	(2)	60	30
- C.P.S. Escribanos	16	60	30
TUCUMAN			
- C.P.S. Abogados y Procuradores	8	55	25
- C. Notarial	No hay datos disponibles.		

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO C (Continuación)

REGIONES PROVINCIAS ORGANISMOS	Aportes sobre Honorarios (o/o)	Requisitos para la Jubilación Ordinaria (A m b o s S e x o s)	
		Edad	Años de Servicios
REGION IV			
CORDOBA			
- C.P.S.S. Abogados y Procuradores	(1)	60	30
- C.P.S.S. Ingeniería	9	60	30
- C. Notarial	15	60	30
- C. Profesionales de la Salud	(1)	60	30
MENDOZA			
- C.J. y P. Abogados y Procuradores	(2)	60	30
- C.P.S. Escribanos	9	60	30
SAN LUIS			
- C.P.S. Escribanos	No hay datos disponibles.		
REGION V			
RIO NEGRO			
- C. Forense	No hay datos disponibles.		

(1) Aportan porcentajes sobre el monto de la jubilación ordinaria.

(2) Se establece un aporte fijo por categorías.

CAPITULO II

EVOLUCION DEMOGRAFICA

Una consideración previa es necesaria antes de abordar este capítulo en el que se trata lo referente a la población amparada; es el relativo al número de años que acumula cada régimen previsional. Es decir, al comparar lo que haya acontecido en la Provincia de Santa Fe -por caso- en materia de evolución de las personas comprendidas con alguna de las llamadas Provincias Nuevas, no debiera estar ausente una mención al diferente estadio en el que se encuentra cada uno de los respectivos regímenes.

La evolución de las personas en relación de dependencia del sector público provincial y municipal, en general, es consecuencia directa de las acciones gubernamentales no sólo del nivel de autoridades locales sino aún de aquellas que son impulsadas desde los ministerios respectivos del Poder Ejecutivo Nacional. Programas de racionalizaciones del gasto público, restricciones para actualizaciones de las remuneraciones de los agentes, transferencias de servicios, actividades y acciones financiadas por el Tesoro Nacional al ámbito provincial, programas de incentivos a la localización de emprendimientos, empresas o industrias que aceleran el crecimiento del sector público (y aún la instalación de establecimientos militares) son factores gravitantes para ensanchar o morigerar la cantidad de personas a las que está dirigida la cobertura de cada régimen de previsión social.

A través de la información que brindan los cuadros de este capítulo se apreciará las series para cada uno de los organismos encuestados. Es de advertir que el procesamiento de datos en materia del personal en actividad reconoce como fuentes las propias estimaciones de los funcionarios a cargo de la administración de los regímenes previsionales, por cuanto el relevamiento de estos datos, generalmente, depende de transferencias no sistemáticas de las áreas sustantivas en materia de administración del personal. Dicho esto se comprenderá algunas carencias -y, en contados casos, ausencias- que han imposibilitado construir las series correspondientes a algunas jurisdicciones u organismos.

En lo que hace a la porción del universo que involucra a los beneficiarios de prestaciones - jubilaciones y pensiones -los cuadros preparados muestran en el mayor detalle posible las series que el acopio de datos permitió compilar. Al respecto, parece oportuno indicar que en el curso de las entrevistas llevadas a cabo para efectuar este acopio fue frecuente observar buena cantidad de producción estadística, pero en contados casos puede afirmarse que esto se debía a sistematizada rutina; mas bien -y por el conocimiento de anteriores experiencias en trabajos similares- fue aprovechada toda la documentación, antecedentes e informes que pudieran contener datos e información útiles al efecto. Y, justo es reconocer, la viabilidad de practicar una exhaustiva revisión de todo el procesamiento de la información no fue planteado como objetivo de este trabajo, pero amerita señalarse estos hechos, sobre los que se volverá más adelante.

Con el auxilio de dos cuadros se resume el conjunto de datos contenidos en el presente capítulo. El Cuadro-Resumen I indica las "Tasas de crecimiento del número de personas comprendidas en regímenes previsionales del sector público provincial y municipal", tasas que son las resultantes de comparar los valores extremos para cada período computado, según sea la jurisdicción de que se trate. Convendrá tener presente que para la jurisdicción Provincia de Buenos Aires se computan los respectivos universos de tres organismos: Instituto de Previsión Social, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones del Personal de Policía, y Caja de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios del personal del Banco de la Provincia; por carecer de los datos pertinentes ha debido excluirse en cambio a las Cajas para el personal municipal que están en funcionamiento en las Provincias de: Entre Ríos (5 Cajas), Santa Fe (6), Tucumán (1) y Neuquén (1).

Las tasas del Cuadro-Resumen I no hacen otra cosa que validar, para la gran mayoría de las jurisdicciones, que el crecimiento de la población en actividad comprendida es más atenuado si se lo compara con el resultante al de los beneficiarios, llegando a ser muy distantes en algunas de ellas; tal por caso, lo acontecido en la Provincia de Buenos Aires, por cuanto la tasa de crecimiento de los beneficiarios -en los últimos 17 años- es equivalente a 10 veces la tasa correspondiente a la variación en el número de los activos. Algo similar, aunque en magnitudes distintas, se detecta en otras Provincias, pero bien podría buscarse un justificativo válido al tiempo que se repare en que se trata de regímenes relativamente jóvenes (con vigencia inferior a los treinta años), circunstancia que implica una abultada demanda de prestaciones y que es consecuencia de es-

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

te primer estadio en el desarrollo de estos regímenes. Entre estas últimas provincias, se encuentran: Misiones, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

Por otra parte, se apreciará que para las provincias de: La Pampa (últimos 5 años), Tucumán (entre los años 1970 al 80) y San Luis (últimos 6 años) el crecimiento registrado en su nómina de aportantes ha resultado superior al que corresponde a sus respectivos colectivos de beneficiarios. Tal vez, para las dos últimas haya influido en mayor medida las transferencias de servicios nacionales y la incorporación consecuente de las plantas de personal afectado a los mismos; para la evolución de La Pampa, además de estas acciones gubernamentales (y el crecimiento del sector servicios, por lo menos en su ciudad Capital) se denota el complemento de una demanda atemperada de nuevas prestaciones, según lo registrado en el lapso de los años 1977-1982, por lo menos, frente a regímenes que se compadecen de su estadio de desarrollo.

La tasa negativa (-8,5) que arroja la serie que muestra la evolución de los activos de la Provincia de La Rioja pone en evidencia los efectos de una política de reducción del personal afectado al sector público provincial, la que -se deduce- ha debido ser persistente en el lapso considerado puesto que inclusive se registra esta reducción aún a despecho de la incorporación de plantales transferidos por absorción de servicios nacionales. También ha ocurrido algo similar -pero sólo en el lapso de los dos últimos años- en la Provincia de San Juan, aunque la tasa es mucho menos significativa (-1,9 o/o); en ausencia de datos para un período más extenso bien puede resultar un juicio equivocado en base a hechos coyunturales, por lo que si se señala es únicamente para destacar una circunstancial coincidencia de dos jurisdicciones de la misma región que acusan tasas de disminución en el número de aportantes a sus respectivos regímenes de previsión social.

Ahora bien, si el análisis se centra en las tasas anuales acumuladas en los períodos computados -información implícita pero de fácil obtención- las más elevadas en cuanto a los activos resultan para las provincias de: Neuquén, La Pampa y Misiones (con tasas que rondan el 8 y 7 o/o anual respectivamente), en tanto que las de menor rango corresponden a: Buenos Aires (1 o/o), Mendoza (2 o/o), Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Salta (2,5 o/o) y Córdoba (3 o/o). Cuando se observa el crecimiento de los beneficiarios, las tasas anuales acumuladas con valores inferiores pertenecen a: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y San Luis (alrededor del 3,5 o/o), Salta y Mendoza (rondan el 4 o/o), Catamarca y La Rioja (poco menos del 5 o/o); y son las provincias nuevas -excepto La Pampa, como ya se puntualizara- las que acusan los índices de crecimientos mayores, tasas que a mediano plazo debieran atemperarse una vez superada la etapa de la evolución alcanzada.

Como último comentario de este Cuadro-Resumen I queda expresar el comportamiento registrado, a través de lapsos relativamente prolongados, de los universos de activos y beneficiarios de las provincias de Santa Fe y Tucumán. En ambos casos, las variaciones de éstos y aquellos se asemejan y las tasas se ubican en una franja entre el 5,5 o/o al 6 o/o anual; como ya se dijo, para la Provincia de Tucumán el incremento de los activos supera levemente a la tasa de los beneficiarios, en cambio para el caso de Santa Fe la situación es inversa y la diferencia un tanto mayor.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO RESUMEN I

TASAS DE CRECIMIENTO (*) DEL NUMERO DE PERSONAL COMPRENDIDAS EN REGIMENES PREVISIONALES DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Regiones y Jurisdicciones	Período Computado	Nro. de Años	Personas en Actividad (Cifras en o/o)	Beneficiarios (en total)
REGION I				
-Pcia. BUENOS AIRES	1965-82	17	18,5	189,3
-Pcia. LA PAMPA	1977-82	5	41,6	35,7
-Municipalidad de la Ciudad BUENOS AIRES	1977-82	5	12,7	18,2
REGION II				
-Pcia. CORRIENTES	1978-82	4	21,0 (1975-82)	47,6
-Pcia. CHACO	1974-82	8	(1)	119,2
-Pcia. ENTRE RIOS (2)	1974-82	8	(1)	57,7 (2)
-Pcia. FORMOSA	1979-82	3	(1)	28,6
-Pcia. MISIONES	1970-82	12	129,2	400,0
-Pcia. SANTA FE (2)	1970-82	12	87,5	99,6
REGION III				
-Pcia. CATAMARCA	1977-82	5	24,2	26,3
-Pcia. JUJUY	1970-81	11	88,7 (1976-82)	79,3
-Pcia. SALTA	1978-82	4	10,7	16,7
-Pcia. SANTIAGO DEL ESTERO	1976-82	6	(1)	50,0
-Pcia. TUCUMAN (2)	1970-80	10	67,3	64,9
REGION IV				
-Pcia. CORDOBA	1960-81	21	89,5	290,0
-Pcia. LA RIOJA	1976-82	6	- 8,5 (1978-82)	20,0
-Pcia. MENDOZA	1976-82	6	11,4	26,3
-Pcia. SAN JUAN	1980-82	2	- 1,9 (1975-82)	41,6
-Pcia. SAN LUIS	1976-82	6	35,8	22,0
REGION V				
-Pcia. CHUBUT	1979-82	3	14,2	26,7
-Pcia. NEUQUEN (2)	1976-82	6	58,1	180,0
-Pcia. RIO NEGRO	1979-82	3	15,2 (1970-82)	433,0
-Pcia. SANTA CRUZ	1979-82	3	17,0 (1976-82)	233,0
-TERRITORIO NACIONAL TIERRA DEL FUEGO	1979-80	1	(1)	33,0

(*) Obtenidas de la comparación entre los valores extremos del período computado.

(1) No hay datos disponibles de varios años.

(2) Excluidas las Cajas Municipales.

Nota: Entre paréntesis se indican los períodos distintos a los computados en la primera columna.

CUADRO RESUMEN II

COMPOSICION DEMOGRAFICA AL FINALIZAR EL AÑO 1981, DE LOS
REGIMENES PREVISIONALES VIGENTES EN CADA JURISDICCION

Regiones y Jurisdicciones	Del Sector Público		De Actividades Profesionales	
	Activos	Beneficiarios	Activos	Beneficiarios
REGION I				
-Pcia. Buenos Aires	281.000	135.900	83.900	5.430
-Pcia. La Pampa	11.000	1.800	300	10
-Municipalidad de la Ciudad Buenos Aires	79.900	52.100 /	---	---
REGION II				
-Pcia. Corrientes	23.300	9.000	---	---
-Pcia. Chaco (1)	35.500	5.400	280 (1)	10 (1)
-Pcia. Entre Ríos (2)	37.100	14.900	1.600 (2)	100 (2)
-Pcia. Formosa	19.000	1.700	---	---
-Pcia. Misiones	22.000	3.200	---	---
-Pcia. Santa Fe (3)	91.000	44.300	18.500 (3)	2.350 (3)
REGION III				
-Pcia. Catamarca	13.300	4.600	---	---
-Pcia. Jujuy	20.000	5.000	---	---
-Pcia. Salta	33.900	9.600	560	95
-Pcia. Santiago del Estero	31.000	8.500	---	---
-Pcia. Tucumán (4)	39.800	12.900	1.000 (4)	100 (4)
REGION IV				
-Pcia. Córdoba	82.800	35.100	28.330	2.990
-Pcia. La Rioja	12.000	4.700	---	---
-Pcia. Mendoza	45.000	20.700	2.050	430
-Pcia. San Juan	21.800	10.300	---	---
-Pcia. San Luis (5)	14.800	4.900	60 (5)	10 (5)
REGION V				
-Pcia. Chubut	14.000	1.800	---	---
-Pcia. Neuquen	14.900	1.300	---	---
-Pcia. Rio Negro (6)	20.000	2.600	200 (6)	10 (6)
-Pcia. Santa Cruz	9.500	1.900	---	---
TOTALES	972.600	392.200	136.780	11.535
TOTAL POR SECTORES	1.364.800		148.315	

(1) Incluye Caja Notarial - (2) Incluye las Cajas Municipales: Gualguaychú, Villa Elisa, Basavilbaso y San Salvador - (3) Incluye las Cajas Municipales de: Santa Fe, Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Rufino y Esperanza; y las Cajas de: Abogados y Procuradores; Arte de Curar, Ingeniería y Notarial - (4) Incluye las Cajas: Municipalidad de la Capital (S.M. de Tucumán); de Abogados y Procuradores; y Notarial (cifras estimadas).

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El Cuadro Resumen II muestra un estado de situación al finalizar el año 1981. De allí se puede inferir que la población total amparada por los regímenes previsionales bajo análisis asciende a una cifra próxima a 1.500.000 personas (algo menos del 10 o/o de la población del país con edades mayores a 19 años) siendo 1.100.000 las personas en actividad y aproximadamente 400.000 los beneficiarios de jubilaciones y pensiones. Para estos cómputos se ha contado con los datos relativos a los regímenes del ámbito municipal -las trece Cajas señaladas en el párrafo anterior- y se incorporan las estimaciones de los universos en los casos que ello resultó imprescindible, especialmente para no excluir de la mención a los regímenes que amparan a las personas dedicadas a actividades profesionales y cuyas magnitudes no modifican sustancialmente el gran total aludido precedentemente. De este cuadro sintético surge que la relación activos/beneficiarios, al finalizar el año 1981, arroja los siguientes valores:

- para el sector público provincial y municipal, existían aproximadamente 2 y 1/2 aportantes por cada beneficiario;
- para el conjunto de regímenes que protegen a personas dedicadas a actividades profesionales, el respectivo coeficiente asciende a casi 12 aportantes por cada beneficiario, y
- para el gran total de ambos agrupamientos la relación se mantiene en un valor inferior a 3 (2,74 aportantes por cada beneficiario).

Si se toma como coeficiente límite el valor 4, es decir que por cada beneficiario existen cuatro personas en actividad, la situación individual de cada jurisdicción al concluir el año 1981 es la que se muestra seguidamente. En este listado se ha tenido en cuenta solamente las personas comprendidas en el sector público, por lo que se deja aclarado que otros podrían ser los valores aquí tabulados si se computaran los colectivos amparados por otros regímenes locales en once de las jurisdicciones analizadas. En la primera columna se ordenan las jurisdicciones cuyos coeficientes no alcanzan el valor 4, indicándose entre paréntesis los que corresponden a cada una; en la columna del lado derecho, aquellas que lo superan y en orden invertido:

RELACION ACTIVOS/BENEFICIARIOS - año 1981.

-Municipalidad Ciudad Buenos Aires (1,5)	-Pcia. Neuquén (11,5)
-Pcia. Buenos Aires (2,1)	-Pcia. Formosa (11,2)
-Pcia. Santa Fe (2,1)	-Pcia. Chubut (7,8)
-Pcia. San Juan (2,1)	-Pcia. Río Negro (7,7)
-Pcia. Mendoza (2,2)	-Pcia. Misiones (6,9)
-Pcia. Córdoba (2,4)	-Pcia. Chaco (6,6)
-Pcia. Entre Ríos (2,5)	-Pcia. La Pampa (6,1)
-Pcia. Corrientes (2,6)	-Pcia. Santa Cruz (5,0)
-Pcia. La Rioja (2,6)	-Pcia. Jujuy (4,0)
-Pcia. Catamarca (2,9)	
-Pcia. San Luis (3,0)	
-Pcia. Tucumán (3,1)	
-Pcia. Salta (3,5)	
-Pcia. Santiago del Estero (3,6)	

Las provincias que integran la columna del lado izquierdo estarán prioritariamente preocupadas por la administración de las erogaciones en prestaciones y en su financiamiento; en cambio, en las del lado opuesto -con la salvedad del caso de Jujuy- estas preocupaciones girarán en torno de la administración técnicamente racional y eficaz de los recursos -se trate de los ya acumulados como consecuencia del período de "maduración" y adquisición de compromisos futuros, como de los que resulten en razón de las de cisiones coyunturales y, de corto y mediano plazo- y que a la luz de la experiencia de los regímenes más antiguos no vean zozobrar sus programas de prestaciones sociales. Pero estas consideraciones constituirán los aspectos a tratar más adelante, en el capítulo iii.

En las páginas siguientes se incorporan diez cuadros, identificados por letras y un Anexo Estadístico. En los primeros se detallan datos referidos a la evolución de: activos, beneficiarios -total jubilaciones y pensiones- y del total de la población de cada jurisdicción - Censos Nacionales años 1960, 1970 y 1980- así como indicadores aptos para evaluar el grado de extensión de los programas vigentes en las jurisdicciones. El Anexo Esta-

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

dístico contiene trece cuadros individuales con datos referidos a: afiliados activos, beneficiarios, causas de la invalidez, y reconocimientos y transferencias de años de servicios.

En el Cuadro "G" se presenta información compilada en siete provincias con clasificaciones de los beneficiarios de jubilaciones por tramos de haberes -realizadas en distintos meses, que van desde setiembre/1981 hasta noviembre/1982- y mediante el cual se complementa el cabal conocimiento del desarrollo alcanzado por los distintos regímenes vigentes, tanto de las jurisdicciones que allí se consignan, como de las que puedan ser comparativamente asimilables.

En el cuadro identificado con la letra "H" se presenta información novedosa respecto a una cuestión que es de permanente atención y que en el curso de la encuesta a los organismos previsionales fue reiteradamente puntualizada: la evolución de las jubilaciones por invalidez en regímenes que amparan al personal del sector público provincial y municipal. De las 24 jurisdicciones, por lo menos de 15 de ellas se exponen datos referidos al número de jubilaciones por invalidez, y en los casos que fue posible se señaló -en forma separada- las particularidades que presenta la evolución de estas prestaciones en curso de pago y de las que anualmente se incorporan. Sólo para citar algunos ejemplos que marcan la importancia de esta problemática será suficiente referirse a estos casos: en el régimen general del Instituto de Seguridad Social de La Pampa -dentro del período 1977/1981- las jubilaciones por invalidez acordadas anualmente representan magnitudes muy significativas en el conjunto de las demandas de jubilaciones resueltas favorablemente en cada uno de esos años; otro caso constituye la evolución registrada en la Provincia de Salta, y aquí es posible que se esté en presencia de valores extremadamente altos, no solo para el régimen general sino también para el que cubre a docentes: en 1979 y 1980 las jubilaciones por invalidez acordadas representan más del 50 o/o del total de jubilaciones acordadas en el régimen general; para el régimen de los docentes, en tanto las acordadas en 1978 sólo significaban el 11 o/o, en 1981 su participación ya asciende al 48 o/o del total de las jubilaciones acordadas para dicho régimen. Otro caso para citar, pero ahora respecto a las magnitudes en que pesan las jubilaciones por invalidez en curso de pago, es el del Instituto de Seguridad Social de Neuquén: aquí, siendo en 1976 muy alta la participación alcanzada (24 o/o del total de las jubilaciones en curso de pago) al fin de la serie -año 1982- la situación es mucho más preocupante, puesto que el tercio de la nómina de beneficiarios está motivado en demandas de invalidez. Como casos de contraste: la vecina Provincia de Río Negro, con una evolución que va del 12 o/o en 1971, en forma sostenidamente descendente llega a 1980 con el 6 o/o; y, aunque en menor medida, otra provincia de la misma Región V, presenta también una evolución con tendencia descendente: Santa Cruz, con el 17 o/o en 1976 y el 13 o/o en 1981.

En general, toda la información acopiada en cuanto se relaciona con la administración de las prestaciones originadas en estados de disminución o pérdida de la capacidad laborator-a robustece la idea de impulsar un tratamiento prioritario que permita una revisión integral de todos los aspectos involucrados. Justamente, para complementar el análisis es que se ha decidido incorporar en el Anexo Estadístico -parte final de este capítulo- dos cuadros con datos referidos a las demandas de estas prestaciones. En sendos cuadros -Nº. 2 y Nº 9- se detallan por años y especialidades los casos tratados en dos organismos previsionales con universos importantes: Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Mendoza. Estos dos casos demuestran en números una cuestión a la que nadie deja de mencionar: Las causales invalidantes basadas en deficiencias tratadas por la psicología gravitan mayoritariamente. Sobre la problemática que encierra esta prestación en particular se volverá más adelante, en el momento que se traten los temas que conforman el Capítulo iv.

Antes de pasar a la consideración del desenvolvimiento de los regímenes de previsión social en cuanto hace a las variables económico-financieras -temática que comprenderá el Capítulo iii- se concluye con una referencia en materia de indicadores de población cubierta, según surge del Cuadro "F". Como ya se anunciara, los 67 organismos que administran programas de previsión social -con legislación local en 23 jurisdicciones, puesto que para el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego no existe régimen propio- amparan una población estimada en, aproximadamente: 1.500.000 habitantes. Ahora bien, en base al Censo Nacional Año 1980, para algunas jurisdicciones el número de personas en actividad y en calidad de beneficiarios, es relativamente significativo, al compararse con sus poblaciones; y especialmente del número de habitantes que cuentan con edades entre 20 y más años. Así, en las provincias de: La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, San Luis y Formosa, las personas protegidas representan el 15 o/o y más de sus respectivas poblaciones con edades superiores a los 19 años. En un escalón inmediato inferior -con valores que superan el 10 o/o- se ubican las provincias (ordenadas en forma descendente): Salta, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, Jujuy, Chaco, Chubut, Río Negro, La

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Pampa, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán. Quedan por debajo de este nivel las restantes jurisdicciones (también en orden descendente): Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Misiones, Provincia de Buenos Aires -alrededor del 7 o/o- y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; ésta última con la más pequeña magnitud, próxima al 2,5 o/o de su población comprendida en el indicado tramo de los mayores de 19 años de edad.

De este cuadro surge además que existe una diferencia importante entre la población económicamente activa (entre 20 y 64 años) cubierta por los regímenes bajo análisis y la proporción de beneficiarios con relación al total de población mayores de 65 años. Es decir, mientras los activos -aportantes- representan porcentajes que van desde el 4 o/o para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al 16 o/o de la Provincia de La Rioja (Relación IV), los beneficiarios representan una proporción mayor de la población en edad de serlo del 10 o/o para La Pampa al 44 o/o en el caso de Santa Cruz (Relación VII).

Cabe una reflexión final: del total de la población de 20 a 64 años según el censo de 1980, 15.111.000 habitantes, el 7,3 o/o (1.100.000 activos) está adherida a los regímenes de previsión social de jurisdicciones provinciales (incluida la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires). Sin embargo dichos organismos atienden 403.700 jubilados y pensionados que representan el 17,5 o/o del total de la población de 65 años y más, según dicho censo.

Seguidamente se insertan los anunciados cuadros de cuyo contenido dan cuenta los respectivos títulos:

CUADRO RESUMEN III

SINTESIS DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADOS DE RECURSOS Y EROGACIONES AÑO 1981

(Cifras en miles de millones de pesos corrientes)

Regiones Jurisdicciones Organismos	Total del Activo	Capital Reservas y Resultados	Total Recursos	Prestacio- nes	Total Erogaciones
REGION I					
Pcia. BUENOS AIRES					
- I.P.S.	461,1	380,1	3.461,3	3.214,1	3.238,6
- C.R.P. Policia	44,2	28,5	1.192,6	1.183,4	1.192,4
- C.J.S. y P.Boo. Pcia.	173,4	117,5	419,7	381,5	391,3
- C.P.S. Abogados	76,0	75,1	94,7	54,9	61,7
- C.P.S. Escribanos	86,7	84,9	124,5	70,7	79,4
- C.P.S. Ingenieros	358,2	296,6	215,0	69,6	102,0
- C.P.S. Martilleros	No hay datos disponibles.				
- C.P. y S. Médico	78,4	57,7	133,7	73,2	86,7
- C.S.S. Odontólogos	29,2	28,1	45,9	25,4	33,6
- C.P.S. Procuradores	No hay datos disponibles.				
Pcia. LA PAMPA					
- I.S.S.	105,7	87,9	114,8	50,9	55,9
- C. Forense	No hay datos disponibles.				
MUNICIPALIDAD CIUDAD DE BUENOS AIRES					
- I.M.P.S.	No hay datos disponibles.		1.223,4	1.100,0	1.115,9
REGION II					
Pcia. CORRIENTES					
- I.P.S.	43,1	34,6	177,6	174,9	178,1
Pcia. CHACO					
- I.P.S.	176,3	116,3	242,4	199,4	208,2
- C. Forense	0,3	0,3	1,4	0,9	1,4
- C. Notarial	No hay datos disponibles.				
Pcia. ENTRE RIOS					
- C.J. y P.	52,2	35,6	354,0	340,3	344,4
- C.P.S. Ingeniería	33,7	32,4	28,1	3,3	3,8
- C. Municipales de:	No hay datos disponibles.				
- Gualeguay					
- Gualeguaychú					
- Villa Elisa					
- Basavilbaso					
- San Salvador					
- C. Notarial	No hay datos disponibles.				

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO RESUMEN III (Continuación)

Regiones Jurisdicciones Organismos	Total del Activo	Capital Reservas y Resultados	Total Recursos	Prestacio- nes	Total Erogaciones
Pcia. FORMOSA - C.P.S.	162,2	154,3	132,2	42,6	49,4
Pcia. MISIONES - I.P.S.	29,7	28,3	105,4	77,6	84,3
Pcia. SANTA FE - C.P.S. Provincial	No hay datos disponibles		1.111,9	1.106,1	1.111,9
- I.M.P.S. Rosario	16,7	11,0	91,1	133,1	140,2
- C. Abogados y Procuradores	No hay datos disponibles.				
- C. Arte de Curar					
- C. Ingenierfa (1o y 2o Circ.)					
- C. Notarial					
- C. Municipalidades de:					
- Santa Fe	No hay datos disponibles.				
- Venado Tuerto					
- Cañada de Gómez					
- Rufino					
- Esperanza					
REGION III					
Pcia. CATAMARCA - I.P.P.S.	50,1	1,1	104,1	103,8	106,0
Pcia. JUJUY - I.P.P.S.	39,5	2,0	168,1	168,5	172,5
Pcia. SALTA - C.P.S.	128,4	70,1	369,4	318,1	326,3
- C.S.S. Abogados	3,3	3,3	5,0	2,7	3,5
- C.P.S. Escribanos	6,4	4,9	5,7	2,3	3,4
Pcia. SGO. DEL ESTERO - I.S.S.	30,0	21,9	239,1	225,0	229,7
Pcia. TUCUMAN - I.P.S.A. (1)	6,3	1,5	27,0	29,4	30,8
- C. Municipal Capital	No hay datos disponibles.				
- C. Abogados y Procuradores					
- C. Notarial					

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO RESUMEN III (Continuación)

Regiones Jurisdicciones Organismos	Total del Activo	Capital Reservas y Resultados	Total Recursos	Prestacio- nes	Total Erogaciones
REGION IV					
Pcia. CORDOBA					
- C.J.P. y R. Provincial	305,1	144,5	1.155,0	1.042,5	1.071,1
- C.P. y S.S. Abogados y Procuradores	30,9	30,8	40,0	17,2	21,7
- C.P. y S.S. Ingeniería	48,2	48,0	52,4	20,1	24,6
- C. Notarial	45,4	30,6	39,6	19,7	22,3
- C. Profesionales de la Salud	No hay datos disponibles.		55,8	33,3	36,5
Pcia. LA RIOJA					
- I.P.S. y A.S.	45,6	38,5	131,0	111,1	114,0
Pcia. MENDOZA					
- C.J.P.	50,9	17,4	708,1	706,2	711,2
- C.J.P. Abogados y Procuradores	12,3	11,9	17,9	5,1	8,5
- C.P.S. Escribanos	No hay datos disponibles.				
Pcia. SAN JUAN					
- C.J. y P.	16,9	5,3	258,3	262,7	266,6
Pcia. SAN LUIS					
- I.P.S.	No hay datos disponibles.		131,9	132,1	135,9
- C.P.S. Escribanos	No hay datos disponibles.				
REGION V					
Pcia. CHUBUT					
- I.S.S. y S.	171,1	32,8	87,4	68,8	74,4
Pcia. NEUQUEN					
- I.S.S.	80,3	64,5	86,8	44,1	47,9
- I.M.P.S. Ciudad Neuquén	3,1	3,1	4,3	1,3	2,5
Pcia. RIO NEGRO					
- C.P.S.	107,9	99,2	159,0	122,3	126,3
- C. Forense	No hay datos disponibles.				
Pcia. SANTA CRUZ					
- C.P.S.	68,3	45,8	118,2	89,2	93,7
TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO	No hay Organismo local.				

(1) Los datos corresponden al Ejercicio año 1978.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Con las cifras compiladas en el Cuadro-Resumen III se está en condiciones de estimar, por ejemplo: los importes que en concepto de recursos y erogaciones administran estos organismos locales. Las cuarenta y dos entidades con datos administran una cifra global de, aproximadamente, \$ 13,8 billones (del año 1981) según una estimación de los recursos; en tanto que por el lado de las prestaciones ronda los \$ 12,4 billones. Como dato de contraste que auxilia a evaluar la significación de las cifras monetarias antes señaladas se podrá utilizar el Total del Presupuesto General para la Administración Central de la Provincia de Buenos Aires (Cierre Ejercicio 1981) - \$ 14,9 billones.

De los importes estimados en el párrafo anterior se deduce que, en conjunto, los organismos citados pueden destinar un escaso 10 o/o de la recaudación anual para: 1o.) hacer frente a sus gastos administrativos (alrededor del 2,5 o/o) y 2o.) consolidar la posición patrimonial y engrosar las reservas, pero para ello sólo queda como remanente el 7,5 o/o del total de los recursos administrados.

Si se observa con algún detenimiento, el Cuadro-Resumen III permite extraer estas reflexiones: las entidades que amparan al personal del sector público, en general, tienen acumuladas -por lo que trasciende de sus estados contables y sin profundizar los aspectos inherentes a su presentación ajustada a la realidad económico-jurídica de cada caso en particular- magras sumas en concepto de Capital y Reservas (en algunas presentaciones de los Balances Generales es usual la expresión: Patrimonio Neto y esa denominación también es empleada en este trabajo). Una manera rápida de ver claramente esta situación es la comparación entre la magnitud alcanzada por este rubro y la resultante para "Prestaciones". Cuando se efectúa para organismos de una misma jurisdicción surge la siguiente consideración genérica: es extremadamente exiguo el volumen correspondiente al rubro Capital y Reservas de los organismos que amparan al personal del sector público respecto de las entidades que protegen a personas dedicadas a actividades profesionales; por lo menos esto es así en la casi totalidad de las jurisdicciones que cuentan con ambos tipos de entidades (la excepción, como se verá más adelante en los Cuadros-Resumen V.a y V.b, se manifiesta en la Provincia del Chaco, al comparar las respectivas magnitudes del Instituto de Previsión Social y de la Caja Forense de esa Provincia). Por supuesto que, si se enfrentan los valores de organismos pertenecientes a las llamadas Provincias Nuevas con los de aquellas que acumulan medio siglo o más de existencia se apreciara que proporcionalmente están mejor dotados los primeros que estos últimos; esto mueve a pensar que entre otros motivos, los efectos monetarios del largo período de inflación registrado en el país han incidido negativamente, en mayor medida, en el contexto de la administración de los regímenes con acumulación de reservas -y, sus colocaciones consecuentes- de larga data. Los organismos que se fueron desarrollando casi simultáneamente con el proceso inflacionario se han adaptado con mayor flexibilidad a estas no deseadas circunstancias y aunque sería difícil sostener una virtual inmunidad a sus nocivos efectos, están en mejores condiciones para morigerarlos.

También del Cuadro-Resumen III se puede extraer información relacionada con el peso específico del rubro Prestaciones dentro del gran total de las Erogaciones. En tal sentido, teniendo en cuenta los datos contables del año 1981 existirían trece organismos con magnitudes igual o superior al 97,5 o/o de dicho total destinado a las Prestaciones; en tanto, para un tramo subsiguiente hasta alrededor del 95 o/o, serían siete las entidades comprendidas. Esta prioritaria participación de los conceptos, que hacen a los fines específicos de estos organismos, corresponde a la casi totalidad de los que amparan al personal del sector público provincial y municipal (por lo menos, de los detallados con datos disponibles en el citado cuadro). Obviamente, los costos de administración en aquellos entes que amparan a personas dedicadas a determinadas actividades profesionales, obedecen no sólo a las propias necesidades para aplicar las clásicas prestaciones del régimen de invalidez, vejez y muerte, sino que, por lo general, deben hacer frente a erogaciones significativas como consecuencia de la administración de prestaciones involucradas en otros programas; asimismo, convendrá recordar que estos organismos tienen que financiar el costo operativo del proceso de recaudación de sus ingresos (tareas que, en general, son de costo nulo para los entes del sector público, y cuya consideración es soslayada).

CUADRO RESUMEN IV.a

**EVOLUCION EN LOS GRANDES RUBROS, SEGUN LOS BALANCES GENERALES Y
ESTADOS DE RECURSOS Y EROGACIONES DE LOS ORGANISMOS QUE AMPARAN AL
PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL**

(Cifras expresadas en números índices)

Regiones Jurisdicciones Organismos	TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL DEL PASIVO		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
REGION I						
Pcia. BUENOS AIRES						
- I.P.S. (1)	162	658	1.830	145	430	4.050
- C.R.J. y P. Policía (2)	935	1.780	1.955	975	2.328	3.041
- C.J.S. y P. Bco. Provincia (3)	100	202	501	100	337	1.785
Pcia. LA PAMPA						
- I.S.S. (4)	1.095	4.047	10.834	3.311	10.347	17.524
MUNICIPALIDAD CIUDAD DE BUENOS AIRES						
- I.M.P.S.	No hay datos disponibles.					
REGION II						
Pcia. CORRIENTES						
- I.P.S. (1)	237	612	1.466	45	101	314
Pcia. CHACO						
- I.P.S. (2)	4.404	9.851	25.228	2.721	6.934	16.147
Pcia. ENTRE RIOS						
- C.J. y P. (4)	447	1.242	2.308	29.777	16.638	128.015
Pcia. FORMOSA						
- C.P.S. (1)	343	914	2.012	189	648	3.842
Pcia. MISIONES						
- I.P.S. (2)	3.010	3.347	3.727	3	1.713	1.468
Pcia. SANTA FE						
- C.P.S. Provincial	No hay datos disponibles.					
- I.M.P.S. Rosario (1)	109	276	745	48	193	277
REGION III						
Pcia. CATAMARCA						
- I.P.P.S. (4)	4.360	6.506	22.897	5.442	8.838	37.704

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO RESUMEN IV.a (Continuación)

Regiones Jurisdicciones Organismos	TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL DEL PASIVO		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
Pcia. JUJUY - I.P.P.S. (2)	327	1.373	4.428	2.329	7.590	18.492
Pcia. SALTA - C.P.S. (4)	1.069	(5)	7.052	642	(5)	3.568
Pcia. SGO. DEL ESTERO - I.S.S. (4)	425	1.120	1.891	5	---	2.295
Pcia. TUCUMAN - I.P. y S.S. (6)	234	405	870	326	1.596	4.764
REGION IV						
Pcia. CORDOBA - C.J.P. y R. Provincial	No hay datos disponibles.					
Pcia. LA RIOJA - I.P.S.A.S. (3)	100	183	1.041	100	414	1.578
Pcia. MENDOZA - C.J. y P. (3)	100	78	209	100	626	934
Pcia. SAN JUAN - C.J. y P. (4)	2.646	4.256	4.423	772	1.463	2.406
Pcia. SAN LUIS - I.P.S.	No hay datos disponibles.					
REGION V						
Pcia. CHUBUT - I.S.S. y S. (4)	1.206	2.668	5.692	4.543	9.723	22.268
Pcia. NEUQUEN - I.S.S. (4) - I.M.P.S. Neuquén (7)	1.300 ---	2.829 100	5.199 187	1.081 ---	4.336 100	11.451 200
Pcia. RIO NEGRO - C.P.S. (4)	694	2.103	3.225	438	1.595	3.192
Pcia. SANTA CRUZ - C.P.S. (3)	100	234	479	100	321	602

(1) Año base 1978 100

(2) Año base 1976 100

(3) Año base 1979 100

(4) Año base 1977 100

(5) No hay datos disponibles.

(6) Año base 1975 100; los valores corresponden a los años 1976, 1977 y 1978.

(7) Año base 1980 100

CUADRO RESUMEN IV.a (Continuación)

**EVOLUCION EN LOS GRANDES RUBROS, SEGUN LOS BALANCES GENERALES Y
ESTADOS DE RECURSOS Y EROGACIONES DE LOS ORGANISMOS QUE AMPARAN AL
PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL**

(Cifras expresadas en números (ndices))

Regiones Jurisdicciones Organismos	CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS			TOTAL DE RECURSOS		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
REGION I						
Pcia. BUENOS AIRES						
- I.P.S. (1)	164	678	1.638	330	949	2.073
- C.R.J. y P. Policía (2)	923	1.617	1.631 (3)	100	253	499
- C.J.S. y P. Bco. Provincia (3)	100	188	373	100	219	447
Pcia. LA PAMPA						
- I.S.S. (4)	837	3.312	10.054	928	2.824	6.582
MUNICIPALIDAD CIUDAD DE BUENOS AIRES						
- I.M.P.S.	No hay datos disponibles, (4)			917	2.015	4.449
REGION II						
Pcia. CORRIENTES						
- I.P.S. (3)	100	264	599	100	(5)	480
Pcia. CHACO						
- I.P.S. (2)	6.319	13.169	35.560	3.334	7.919	18.120
Pcia. ENTRE RIOS						
- C.J. y P. (4)	278	1.154	1.582	943	2.397	4.581
Pcia. FORMOSA						
- C.P.S. (1)	347	921	1.964	347	834	1.676
Pcia. MISIONES						
- I.P.S. (2)	3.379	3.555	4.015	3.352	5.962	12.175
Pcia. SANTA FE						
- C.P.S. Provincial	No hay datos disponibles. (1)			278	649	1.316
- I.M.P.S. Rosario (1)	339	586	2.504	287	504	1.164
REGION III						
Pcia. CATAMARCA						
- I.P.P.S. (3)	100	111	46	100	211	443

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO RESUMEN IV.a (Continuación)

Regiones Jurisdicciones Organismos	CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS			TOTAL DE RECURSOS		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
Pcia. JUJUY - I.P.P.S. (2)	- 346	- 715	- 294	1.875	5.782	13.051
Pcia. SALTA - C.P.S. (4)	4.845	(5)	37.865	1.195	(5)	6.479
Pcia. SGO. DEL ESTERO - I.S.A. (4)	423	1.120	1.380	843	1.748	4.732
Pcia. TUCUMAN - I.P. y S.S. (6)	207	58	- 266	—	1.002	3.175
REGION IV						
Pcia. CORDOBA - C.J.P. y R. Provincial	No hay datos disponibles. (4)			935	2.230	4.695
Pcia. LA RIOJA - I.P.S.A.S. (3)	100	244	484	100	228	431
Pcia. MENDOZA - C.J. y P. (3)	100	- 17	84	100	234	481
Pcia. SAN JUAN - C.J. y P. (4)	405	374	- 980	928	2.333	4.817
Pcia. SAN LUIS - I.P.S.	No hay datos disponibles.					
REGION V						
Pcia. CHUBUT - I.S.S. y S. (4)	337	830	1.375	614	1.616	3.142
Pcia. NEUQUEN - I.S.S. (4)	1.322	2.682	4.586	1.419	2.599	5.685
- I.M.P.S. Neuquén (7)	---	100	187	---	100	193
Pcia. RIO NEGRO - C.P.S. (4)	716	2.149	3.228	876	2.558	4.288
Pcia. SANTA CRUZ - C.P.S. (3)	100	203	435	100	180	442

(1) Año base 1978 100. (2) Año base 1976 100. (3) Año base 1979 100. (4) Año base 1977 100.
 (5) No hay datos disponibles. (6) Año base 1975 100 - Los valores corresponden a los años 1976, 1977 y
 1978. (7) Año base 1980 100.

CUADRO RESUMEN IV.a (Continuación)

EVOLUCION EN LOS GRANDES RUBROS, SEGUN LOS BALANCES GENERALES Y
ESTADOS DE RECURSOS Y EROGACIONES DE LOS ORGANISMOS QUE AMPARAN AL
PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL

(Cifras expresadas en números índices)

Regiones Jurisdicciones Organismos	TOTAL DE EROGACIONES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
REGION I						
Pcia. BUENOS AIRES						
- I.P.S. (1)	313	855	1.891	280	640	1.195
- C.R.J. y P. Policía (2)	100	261	100	100	265	566
- C.J.S. y P. Bco. Provincia (2)	100	230	496	100	180	314
Pcia. LA PAMPA						
- I.S.S. (3)	878	2.192	4.770	1.030	2.390	4.579
MUNICIPALIDAD CIUDAD DE BUENOS AIRES						
- I.M.P.S. (3)	889	2.029	4.088	1.200	3.000	5.300
REGION II						
Pcia. CORRIENTES						
- I.P.S. (2)	100	(5)	477	100	(5)	352
Pcia. CHACO						
- I.P.S. (4)	2.916	6.784	16.092	3.665	8.435	17.058
Pcia. ENTRE RIOS						
- C.J. y P. (3)	965	2.261	4.658	832	1.935	3.695
Pcia. FORMOSA						
- C.P.S. (1)	306	798	1.935	269	603	1.259
Pcia. MISIONES						
- I.P.S. (4)	3.161	7.607	16.435	4.340	8.217	19.277
Pcia. SANTA FE						
- C.P.S. Provincial (1)	278	649	1.316	300	775	1.450
- I.M.P.S. Rosario (1)	278	724	1.762	347	535	2.835
REGION III						
Pcia. CATAMARCA						
- I.P.P.S. (2)	100	243	502	100	241	354

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO RESUMEN IV.a (Continuación)

Regiones Jurisdicciones Organismos	TOTAL DE EROGACIONES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
Pcia. JUJUY - I.P.S.S. (4)	3.472	9.186	20.193	2.055	4.576	9.240
Pcia. SALTA - C.P.S. (3)	990	(5)	5.304	960	(5)	4.774
Pcia. SGO. DEL ESTERO - I.S.S. (3)	826	2.039	4.757	737	1.908	3.793
Pcia. TUCUMAN - I.P.S.S. (6)	518	1.495	4.847	356	1.011	3.761
REGION IV						
Pcia. CORDOBA - C.J.P. y R. Provincial (3)	1.047	2.628	5.361	951	1.067	4.797
Pcia. LA RIOJA - I.P.S.A.S. (2)	100	240	463	100	248	334
Pcia. MENDOZA - C.J. y P. (2)	100	252	494	100	273	455
Pcia. SAN JUAN - C.J. y P. (3)	994	2.415	5.029	747	2.053	3.442
Pcia. SAN LUIS - I.P.S. (3)	952	2.293	4.685	600	1.500	2.641
REGION V						
Pcia. CHUBUT - I.S. y S. (4)	971	2.331	5.227	1.030	2.355	4.062
Pcia. NEUQUEN - I.S.S. (3)	1.194	3.066	6.726	1.026	2.383	4.890
- I.M.P.S. Neuquén (7)	---	100	249	---	100	222
Pcia. RIO NEGRO - C.P.S. (3)	1.262	3.155	7.839	922	2.021	3.817
Pcia. SANTA CRUZ - C.P.S. (2)	100	269	577	100	231	389

(1) Año base 1978 100. (2) Año base 1976 100. (3) Año base 1979 100. (4) Año base 1977 100.
 (5) No hay datos disponibles. (6) Año base 1975 100 - Los valores corresponden a los años 1976, 1977 y
 1978. (7) Año base 1980 100.

CUADRO RESUMEN IV.b.

**EVOLUCION EN LOS GRANDES RUBROS, SEGUN LOS BALANCES GENERALES Y
ESTADOS DE RECURSOS Y EROGACIONES DE LOS ORGANISMOS QUE AMPARAN PERSONAS
CON ACTIVIDADES PROFESIONALES EN LAS PROVINCIAS INDICADAS**

(Cifras expresadas en números índices)

PROVINCIAS	TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL DEL PASIVO		
ORGANISMOS	1979	1980	1981	1979	1980	1981
BUENOS AIRES						
- C.P.S. Abogados (1)	13.228	24.526	52.794	2.700	12.750	46.350
- C.P.S. Escribanos (2)	814	1.541	3.235	500	1.187	1.422
- C.P.S. Ingenieros (2)	1.545	3.767	9.071	2.376	12.469	26.112
- C.P. y S. Médico (3)	279	684	2.572	269	602	1.310
- C.S.S. Odontólogos (3)	374	2.248	5.718	389	1.139	3.042
CHACO						
- C. Forense (1)	931	1.850	2.055	275	650	1.425
ENTRE RIOS						
- C.P.S. Ingeniería (2)	145	385	945	3.650	15.200	36.650
CORDOBA						
- C.P.S.S. Abogados y Procuradores.						
- C.P.S.S. Ingeniería				No hay datos disponibles.		
- C. Notarial						
- C. Profesionales de la Salud						
MENDOZA						
- C.J. y P. Abogados y Procuradores (2)	100	333	935	100	320	2.340

- (1) Año base 1976 100
(2) Año base 1977 100
(3) Año base 1978 100

Nota: Para los organismos excluidos del presente Cuadro Resumen: No hay datos disponibles.

CUADRO RESUMEN IV.b (Continuación)

EVOLUCION EN LOS GRANDES RUBROS, SEGUN LOS BALANCES GENERALES Y
ESTADOS DE RECURSOS Y EROGACIONES DE LOS ORGANISMOS QUE AMPARAN PERSONAS
CON ACTIVIDADES PROFESIONALES EN LAS PROVINCIAS INDICADAS

(Cifras expresadas en números índices)

PROVINCIAS ORGANISMOS	CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS			TOTAL DE RECURSOS		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
BUENOS AIRES						
- C.P.S. Abogados (1)	13.376	24.692	52.885	9.108	19.440	41.714
- C.P.S. Escribanos (2)	829	1.558	3.323	880	1.639	3.297
- C.P.S. Ingenieros (2)	1.492	3.214	7.988	934	2.259	5.369
- C.P. y S. Médico (3)	291	772	3.929	320	764	2.512
- C.S.S. Odontólogos (3)	373	2.332	5.921	386	1.512	3.953
CHACO						
- C. Forense (1)	115	225	226	2.836	6.964	12.291
ENTRE RIOS						
- C.P.S. Ingeniería (2)	1.407	3.609	8.883	1.562	3.876	8.633
CORDOBA						
- C.P.S.S. Abogados y Procuradores (4)	No hay datos disponibles.			---	100	238
- C.P.S.S. Ingeniería (4)				---	100	258
- C. Notarial (2)				990	2.811	5.893
- C. Profesionales de la Salud (4)				---	100	200
MENDOZA						
- C.J. y P. Abogados y Procuradores (3)	333	920	2.517	353	931	2.333

- (1) Año base 1976 100
(2) Año base 1977 100
(3) Año base 1978 100
(4) Año base 1980 100

Nota: Para los organismos excluidos del presente Cuadro Resumen: No hay datos disponibles.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES**CUADRO RESUMEN IV.b (Continuación)**

**EVOLUCION EN LOS GRANDES RUBROS, SEGUN LOS BALANCES GENERALES Y
ESTADOS DE RECURSOS Y EROGACIONES DE LOS ORGANISMOS QUE AMPARAN PERSONAS
CON ACTIVIDADES PROFESIONALES EN LAS PROVINCIAS INDICADAS**

(Cifras expresadas en números índices)

PROVINCIAS	TOTAL DE EROGACIONES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		
ORGANISMOS	1979	1980	1981	1979	1980	1981
BUENOS AIRES						
- C.P.S. Abogados (1)	8.373	24.214	51.389	6.293	11.083	22.613
- C.P.S. Escribanos (2)	1.035	2.323	4.263	779	1.517	1.919
- C.P.S. Ingenieros (2)	1.534	4.332	11.449	1.263	3.291	7.512
- C.P. y S. Médico (3)	327	773	1.998	298	659	1.999
- C.S.S. Odontólogos (3)	321	836	3.221	258	676	3.542
CHACO						
- C. Forense (1)	6.400	15.850	33.775	3.033	6.300	15.033
ENTRE RIOS						
- C.P.S. Ingeniería (2)	2.170	6.080	15.420	960	2.560	4.440
CORDOBA						
- C.P.S.S. Abogados y Procuradores (4)	---	100	212	---	100	288
- C.P.S.S. Ingeniería (4)	---	100	224	---	100	190
- C. Notarial (2)	1.070	2.924	6.548	1.115	2.250	4.833
- C. Profesionales de la Salud (4)	---	100	205	---	100	185
MENDOZA						
- C.J. y P. Abogados y Procuradores (3)	378	966	2.124	297	668	1.260

(1) Año base 1976 100

(2) Año base 1977 100

(3) Año base 1978 100

(4) Año base 1980 100

Nota: Para los organismos excluidos del presente Cuadro Resumen: No hay datos disponibles.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Los dos Cuadros-Resumen IV se presentan como una alternativa de las tantas que posibilita la documentación disponible. La presentación conjunta de los números índices -que corresponde a: Total del Activo, Total del Pasivo, Capital, Reservas y Resultados, Total de Recursos, Total de Erogaciones y Gastos de Administración- en forma de listado de cada uno de los organismos con datos suficientes para construir la serie 1979-1981 ayuda a visualizar tendencias o manifestaciones comunes. Deliberadamente en su construcción se ha transcritto los valores consignados en cada cuadro individual tomando como año base el adoptado allí; por cuanto el análisis se centrará en aspectos generales y no necesariamente requiere una elaboración previa que haga homogénea la información sintetizada.

Se pasará ahora a analizar la información que brinda el Cuadro Resumen IV.a. Una rápida observación de los valores correspondientes al primer grupo de columnas-expresan la evolución de los respectivos totales de los rubros del Activo y del Pasivo- permite concluir que sólo seis organismos previsionales registran, al finalizar el período 1979-1981, índices menores para el Total del Pasivo comparados con los resultantes para el Activo; ello estaría indicando que la gran mayoría de las entidades han experimentado cambios en su estructura patrimonial, ensanchando la importancia de los rubros que evidencian obligaciones reales o potenciales. Estas modificaciones inciden en la evolución del rubro "Capital, Reservas y Resultados" (o Patrimonio Neto) y para evaluar su comportamiento se presenta una columna con los valores correspondientes a éste, enfrentándolo con los índices obtenidos para el Total de Recursos. De esta comparación surge que sólo siete organismos experimentan una evolución de los recursos a menor ritmo que el registrado para el primer rubro citado (a título de ejemplos, se cita: la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Salta registra en el año 1981 un Patrimonio Neto equivalente a casi ocho veces el que poseía en 1979, en tanto que los recursos apenas si exceden el quíntuplo; otro caso bien podría ser el Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La Pampa, mientras su Patrimonio Neto del año 1981 es doce veces el que tenía acumulado en 1979, sus recursos alcanzan una magnitud equivalente a siete veces). Marginando del análisis la situación particular del Instituto Provincial de Previsión Social de Jujuy -en sus estados contables registra saldos negativos para el rubro Capital, Reservas y Resultados- habría dos interesantes casos para citar como ejemplos entre los organismos que evidencian dificultades en el crecimiento armónico de sus respectivos patrimonios en función de los recursos administrados, ellos son: el Instituto Provincial de Previsión Social de la Provincia de Catamarca -el rubro Capital, Reservas y Resultados disminuye casi a la mitad, en tanto sus recursos crecen a más de cuatro veces- y el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Misiones -mientras el primer rubro apenas si registra un crecimiento del 20 o/o, los recursos del año 1981 son 3,6 veces de los correspondientes al ejercicio 1979- y, la elección de estos dos organismos es al solo efecto de demostrar que las dificultades económicas planteadas en la consolidación de los regímenes previsionales vigentes se extiende aún a aquellos de más reciente data.

El Cuadro-Resumen IV.a., concluye con un juego de columnas donde se consignan los números índices para el Total de Erogaciones y Gastos de Administración. En general, la evolución de estos últimos estaría demostrando que su crecimiento obedece más bien a los efectos monetarios, en tanto que para el Total de Erogaciones -además de computarse la incidencia causada por la inflación- influye el lógico aumento del número de beneficiarios amparados por cada régimen previsional. Las excepciones a esta generalizada tendencia se manifiestan en las siguientes entidades: Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe (los Gastos de Administración del año 1981 representan 4,8 veces a los de 1979, en tanto el Total de Erogaciones sólo representan 4,7 veces); Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (aquí los valores respectivos son: 8,2 veces para los Gastos de Administración y 6,3 veces para el Total de Erogaciones) y el Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de Tucumán (en este caso las variaciones arrojan: 10,6 veces para los primeros y 9,4 veces para los segundos).

El Cuadro-Resumen IV.b. contiene información respecto a la evolución de los organismos cuyo regímenes amparan a personas dedicadas a determinadas actividades profesionales. En general -según los casos con datos disponibles- las consideraciones efectuadas para los organismos del sector público encuadran al momento de analizar la evolución, en particular, de cada una de estas entidades. Sobre todo cuando se trata de los rubros del Activo frente a los componentes del Pasivo -en cinco organismos es mucho más significativa la variación experimentada por los últimos respecto a los del Activo- aunque por la comparación del ritmo de crecimiento del Patrimonio respecto al Total de los Recursos -también cinco entidades ven crecer a mayor ritmo el primero respecto de los recursos- parezca que las modificaciones patrimoniales no alcancen a gravitar en mayor medida. Respecto de las variaciones en materia de Gastos de Administración y estos frente al desarrollo del Total de Erogaciones se observa que la mayoría de las entidades han visto incrementar estas últimas en

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

magnitudes superiores a las resultantes para los egresos administrativos (en tres casos esto no ocurre) pero las diferencias de ritmo en el crecimiento son relativamente pequeñas; por lo menos, en dos de estas entidades).

En la preparación de los dos cuadros posteriores se adoptó una combinación de los datos que forman parte del presente capítulo y del que le antecede (personas comprendidas en cada uno de los organismos previsionales tratados: tanto sea en actividad como en calidad de beneficiarios). Si bien el acopio efectuado permite acceder a una extensa batería de indicadores, en la construcción de los citados cuadros se incorporó un reducido número con el propósito de plantear aquellos que ayuden la comparación del comportamiento de algunas variables, entre las consideradas representativas y encuadradas en parámetros homogéneos. Vuelve a reiterarse aquí lo ya puntualizado en lo que hace a la imposibilidad de "igualar" a todos los organismos, intentando hacer un análisis que transgreda las propias realidades de cada jurisdicción, por ello, de todos modos, no debiera olvidarse la consideración de los diferentes estadios en el desarrollo de cada entidad en particular.

El Cuadro-Resumen V.a. contiene los indicadores que corresponden a regímenes previsionales administrados por organismos del sector público, con datos para el Año 1981. Las cifras de la primera columna están expresadas en miles de pesos de ese año- permiten conocer los diferentes niveles monetarios del rubro Patrimonio Neto (equivalente a "Capital, Reservas y Resultados") si se lo mide a través del número total de personas comprendidas en los respectivos organismos. Se indica, entonces, la "cuota-parte" potencial para cada uno de los componentes del universo, asignable en la hipótesis extrema de una abrupta liquidación de la entidad (y, por supuesto, con la drástica interrupción en el pago regular de las prestaciones; esto no debiera soslayarse ya que dentro de los conceptos del Pasivo se margina el cómputo de la obligación consecuente por las prestaciones en curso de pago). La cifra más alta corresponde a la Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa (esto no debiera sorprender si se tiene presente que se trata de un régimen relativamente reciente); le siguen, en orden descendente, el Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La Pampa y la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entre las entidades con cifras inferiores figuran: el Instituto Provincial de Previsión Social de Catamarca (\$ 63.000 del año 1981 por cada afiliado activo y beneficiario comprendido), la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Mendoza (\$ 265.000 del año 1981) y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (\$ 547.000 del indicado año).

En materia de recursos el indicador construido permite conocer las distintas cifras que por cada afiliado en actividad recauda, en el curso del año 1981, el respectivo organismo; pero esta recaudación es consecuencia de varios factores, entre los que se destacan: la relación demográfica (número de aportantes por cada beneficiario), suficientes reservas y su disponibilidad, y el volumen de prestaciones en curso de pago. Dicho esto no sorprenderá que los promedios de los recursos obtenidos para la mayoría de las entidades con regímenes propios más recientes resulten de menor magnitud (varían entre \$ 4.800.000 por afiliado/año y menos de \$ 8.000.000, también por afiliado/año), en tanto los promedios mayores se obtienen para los regímenes de las jurisdicciones: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (en la primera de las nombradas se registra el valor más alto con más de \$ 38.000.000 afiliado/año y pertenece al régimen de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía).

Con la tercera columna del Cuadro-Resumen V.a. se está en condiciones de evaluar el nivel monetario de las prestaciones pagadas en el curso del año 1981, medido a través del indicador construido en base a este concepto y el número de beneficiarios que las percibieron. En general puede observarse valores muy semejantes para aquellos organismos con universos numerosos (I.P.S. de Buenos Aires, C.J. y P. de Santa Fe, C.J.P. y R. de Córdoba, C.J. y P. de Mendoza, mientras que para los organismos integrantes de la Región V los valores son en conjunto más elevados (en dos regímenes rondan los \$ 47.000.000 beneficiario/año y en los dos restantes alrededor de los \$ 37.000.000 beneficiario/año). Los casos extremos se presentan de este modo: las cifras de mayor volumen se obtienen para los beneficios abonados por las Caja del Personal del Banco de la Provincia y del personal de la Policía, ambas de la Provincia de Buenos Aires, en tanto que los más inferiores corresponden a los organismos: Instituto Municipal de Previsión Social de la Ciudad del Neuquén (\$ 12.700.000 beneficiario/año) e Instituto de Previsión Social de la Provincia de Corrientes (\$ 19.429.000 beneficiario/año).

La última columna del Cuadro-Resumen V.a. expresa el número de veces que representa el rubro Prestaciones, abonadas en el año 1981, enfrentado con el Patrimonio Neto acumulado al finalizar el citado ejercicio anual. Este indicador complementa las consideraciones ya efectuadas hasta aquí respecto a la insuficiencia según los importes contabilizados y que son conocidos por los Balances Generales suministrados de los or-

CUADRO RESUMEN V.a

INDICADORES DEL DESENVOLVIMIENTO DE LOS REGIMENES PREVISIONALES QUE
AMPARAN AL PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL - AÑO 1981

Regiones	Patrimonio Neto promedio por perso- nas comprendidas (Activos y Benefi- ciarios).	Total Recursos promedio por Afiliados en Actividad.	Prestaciones promedio por Benefi- ciarios.	Prestaciones respecto Patrimonio Neto.
Jurisdicciones				
Organismos				
	(Cifras en miles de pesos corrientes)			(Nº de veces)
REGION I				
Pcia. BUENOS AIRES				
- I.P.S.	1.105	14.760	29.326	8,5
- C.R.J. y P. Policía	547	38.471	56.350	41,6
- C.J.S. y P. Bco. Provincia	5.650	27.077	71.989	3,2
Pcia. LA PAMPA				
- I.S.S.	6.865	10.434	28.261	0,6
MUNICIPALIDAD CIUDAD DE BUENOS AIRES				
- I.M.P.S.	(1)	15.312	21.113	(1)
REGION II				
Pcia. CORRIENTES				
- I.P.S.	1.071	7.621	19.429	5,1
Pcia. CHACO				
- I.P.S.	2.843	6.829	36.919	1,7
Pcia. ENTRE RIOS				
- C.J. y P.	715	10.086	23.153	9,6
Pcia. FORMOSA				
- C.P.S.	7.456	6.955	25.066	0,3
Pcia. MISIONES				
- I.P.S.	1.125	4.793	24.238	2,7
Pcia. SANTA FE				
- C.P.S. Provincial	(1)	13.916	30.471	(1)
- I.M.P.S. Rosario	1.060	16.263	24.208	11,3
REGION III				
Pcia. CATAMARCA				
- I.P.P.S.	63	7.832	22.573	92,0

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO RESUMEN V.a (Continuación)

Regiones Jurisdicciones Organismos	Patrimonio Neto promedio por perso- nas comprendidas (Activos y Benefi- ciarios).	Total Recursos promedio por Afiliados en Actividad.	Prestaciones promedio por Benefi- ciarios	Prestaciones respecto Patrimonio Neto.
	(Cifras en miles de pesos corrientes)			(Nº de veces)
Pcia. JUJUY - I.P.P.S.	(2)	8.444	33.698	(2)
Pcia. SALTA - C.P.S.	2.066	10.895	33.137	4,5
Pcia. SGO. DEL ESTERO - I.S.S.	555	7.714	26.467	10,3
Pcia. TUCUMAN - I.P.S.S. (3)	(2)	733 (3)	2.472 (3)	(2)
REGION IV				
Pcia. CORDOBA - C.J.P. y R. Provincial	1.226	13.949	29.702	7,2
Pcia. LA RIOJA - I.P.S. y A.S.	2.306	10.918	23.628	2,9
Pcia. MENDOZA - C.J. y P.	265	15.736	34.116	40,6
Pcia. SAN JUAN - C.J. y P.	(2)	11.851	25.504	(2)
Pcia. SAN LUIS - I.P.S.	(1)	8.911	26.966	(1)
REGION V				
Pcia. CHUBUT - I.S.S. y S.	2.074	6.240	38.206	2,1
Pcia. NEUQUEN - I.S.S.	4.245	6.203	36.769	0,7
- I.M.P.S. Ciudad de Neuquén	3.877	4.807	12.700	0,3
Pcia. RIO NEGRO - C.P.S.	4.392	7.951	47.030	1,2
Pcia. SANTA CRUZ - C.P.S.	4.021	12.438	46.956	1,9

(1) No hay datos disponibles para elaborar el respectivo valor.

(2) Contablemente registra Patrimonio Negativo.

(3) Corresponde al año 1978, último ejercicio disponible.

CUADRO RESUMEN V.b

INDICADORES DEL DESENVOLVIMIENTO DE LOS REGIMENES PREVISIONALES QUE
AMPARAN PERSONAS CON ACTIVIDADES PROFESIONALES, EN LAS PROVINCIAS INDICADAS

AÑO 1981 (*)

Regiones	Patrimonio Neto promedio por per- sonas comprendidas (Activos y Benefi- ciarios).	Total Recursos promedio por Afiliados en Actividad.	Prestaciones promedio por Benefi- ciarios.	Prestaciones respecto Patrimonio Neto.
Provincias				
Organismos				
	(Cifras en miles de pesos corrientes)			(Nº de veces)
REGION I				
BUENOS AIRES				
- C.P.S. Abogados	3.576	4.735	54.883	0,7
- C.P.S. Escribanos	27.400	56.581	78.514	0,8
- C.P.S. Ingenieros	9.568	7.166	69.632	0,2
- C.P.S. Martilleros		No hay datos disponibles		
- C.P. y S. Médico	2.600	6.685	33.265	1,3
- C.S.S. Odontólogos	3.992	6.849	76.876	0,9
- C.P.S. Procuradores		No hay datos disponibles		
LA PAMPA				
- C. Forense	(1)	10.310	52.000	(1)
REGION II				
CHACO				
- C. Forense	1.243	6.438	112.500	3,3
- C. Notarial		No hay datos disponibles		
ENTRE RIOS				
- C.P.S. Ingeniería	20.620	18.752	46.629	0,1
- C. Notarial		No hay datos disponibles		
SANTA FE				
- C.P.S. Abogados y Procuradores		No hay datos disponibles		
- C.P.S. Arte de Curar				
- C.P.S. Ingeniería (1o y 2o Cir.)				
- C. Notarial				
REGION III				
SALTA				
- C.S.S. Abogados	6.119	10.651	39.186	0,8
- C.P.S. Escribanos	33.641	47.883	93.800	0,5
TUCUMAN				
- C.P.S. Abogados y Procuradores		No hay datos disponibles		
- C. Notarial				

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO RESUMEN V.b (Continuación)

Regiones	Patrimonio Neto promedio por per- sonas comprendidas (Activos y Benefi- ciarios).	Total Recursos promedio por Afiliados en Actividad.	Prestaciones promedio por Benefi- ciarios.	Prestaciones respecto Patrimonio Neto.
Provincias				
Organismos				
(Cifras en miles de pesos corrientes)				(Nº de veces)
REGION IV				
CORDOBA				
- C.P.S.S. Abogados y Procuradores	5.010	7.268	26.518	0,6
- C.P.S.S. Ingenieria	7.367	8.445	65.309	0,4
- C. Notarial	33.235	66.070	61.620	0,6
- C. Profesionales de la Salud	(1)	3.489	19.602	(1)
MENDOZA				
- C.J. y P. Abogados y Procuradores	6.214	11.168	15.847	0,4
- C.P.S. Escribanos		No hay datos disponibles		
SAN LUIS				
- C.P.S. Escribanos		No hay datos disponibles		
REGION V				
RIO NEGRO				
- C. Forense		No hay datos disponibles		

(*) En algunos casos, con estimación de las personas comprendidas.

(1) No hay datos disponibles para elaborar el respectivo valor.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ganismos para solventar las prestaciones en curso de pago. Los valores hallados ratifican que sólo en cuatro entidades -de las que se cuenta con los datos- sus respectivos rubros del Patrimonio Neto superan a las sumas erogadas, en 1981, en concepto de Prestaciones (ellas son: Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa -las prestaciones representan el 30 o/o del Patrimonio-; Instituto Municipal de Previsión Social de la Ciudad del Neuquén, -el mismo valor anterior-; Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La Pampa -aquí el indicador es el 60 o/o- y el Instituto de Seguridad Social de la Provincia del Neuquén -cuyo valor alcanza el 70 o/o-). En cuanto a los organismos más comprometidos se señalan: el Instituto Provincial de Previsión Social de la Provincia de Catamarca -las prestaciones representan 92 veces la magnitud del Patrimonio registrado para el año 1981-; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -la magnitud es de casi 42 veces- y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Mendoza -aquí es poco más de 40 veces-.

El Cuadro-Resumen V.b. contiene los mismos indicadores del anterior y está construido con los datos disponibles de los organismos que amparan personas con actividades profesionales. El primer indicador referido al Patrimonio Neto por persona comprendida -se recuerda que incluye: afiliados en actividad y beneficiarios- demuestra que, en general, estas entidades están en mejores condiciones económicas que las analizadas en el cuadro precedente. Excepcionalmente, la Caja Forense de la Provincia del Chaco registra un exiguo valor de algo más de \$ 1.200.000 (del año 1981), situación que provoca una abultada proporción del rubro Prestaciones, en relación al Patrimonio Neto, tal como se apreciará en la última columna. Las cifras resultantes para las tres entidades que amparan a personas dedicadas a las actividades notariales confirman que son líderes en cuanto al potencial resguardo económico (inclusivo, alcanzan valores muy parecidos entre sí y rondan los \$ 30.000.000/año 1981); pero estos resultados por sí solos dan una imagen parcial del desenvolvimiento, por lo tanto, debieran enfrentarse con los valores que arroja la comparación con el rubro Prestaciones. Por ello, observando la última columna del cuadro, se tomará razón de que a estas entidades no les corresponden los índices más bajos, sino más bien valores intermedios (0,8; 0,5 y 0,6, de acuerdo al orden de presentación en el cuadro) y los valores que indican una mejor posición al respecto corresponden a dos entidades que amparan a profesionales de la ingeniería (aquí puede influir la menor antigüedad de estos regímenes si se los compara con las Cajas Notariales). Las tres Cajas que amparan a los profesionales de la ingeniería son justamente, las entidades que acumulan un Patrimonio Neto por persona comprendida (al finalizar el año 1981) en magnitudes significativas: la Caja de la Provincia de Entre Ríos \$ 20.620.000; la Caja de la Provincia de Buenos Aires \$ 9.568.000 y la Caja de la Provincia de Córdoba \$ 7.367.000, y en el mismo orden que han sido citadas figurarían en un ordenamiento de todas las entidades con datos según el indicador determinado en la última columna del cuadro.

Los dos indicadores que conforman las columnas centrales están ratificando lo dicho hasta aquí. No sorprenderá que el promedio de los recursos (medido por sus afiliados en actividad comprendidos) de la Caja Notarial de Córdoba sea casi 10 veces el promedio resultante para la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires; y que, las tres Cajas para profesionales notarios registren los valores más altos (muy alejados del resto de las entidades).

En materia del promedio de las erogaciones en concepto de Prestaciones corresponde puntualizar que los casos extremos se presentan en los regímenes: de la Caja Forense de la Provincia del Chaco, con la cifra más elevada que asciende a \$ 112.500.000/año 1981; y la Caja para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba con \$ 19.602.000/año 1981 (el importe más reducido de las entidades con datos disponibles).

Para finalizar se considera del caso consignar que el sistema de Institutos y Cajas de Previsión Social Provinciales (para el sector público y privado) que se encuentra constituido por 67 organismos (38 y 29 respectivamente) administró en el año 1981 un total de recursos sensiblemente igual al total de primas de seguros de todos los ramos del sistema argentino de seguros, en el que, alrededor de 270 entidades (sociedades anónimas, cooperativas, mutuales, organismos oficiales y sucursales y agencias de sociedades extranjeras) recaudaron en ese año -último para el que se tienen datos completos- un total de \$ 11,5 billones, de primas netas de anulaciones.

Por lo demás, los recursos de las entidades previsionales provinciales consideradas alcanzaron, en el año 1981, aproximadamente el volumen de la mitad del incremento anual en pesos de los depósitos de los bancos privados argentinos, al 31 de diciembre de dicho año.

CAPITULO IV

EVALUACION CONJUNTA DE LA PROBLEMÁTICA JURISDICCIONAL Y LA INCIDENCIA DE
NORMAS, JURISPRUDENCIA Y ACCIONES QUE TRASCIENDEN SU AMBITO

En el análisis efectuado de los organismos previsionales, se han establecido puntos relevantes para mostrar el alcance y desarrollo que los respectivos regímenes tienen, sin omitir aquellos aspectos particulares que inciden en una visión generalizada de conjunto.

En el Capítulo I se establecieron nueve grandes rubros que permiten tomar conocimiento -en forma rápida- de los aspectos legales más importantes de cada régimen.

En los Capítulos II y III se presentaron cuadros individuales y de resumen con comentarios destacando las observaciones más importantes que resultaron de los mismos.

En este Capítulo se puntualizan con óptica global, los fenómenos que en el desenvolvimiento más reciente de los regímenes previsionales han incidido en manera más generalizada e, incluso, se destacan aquellos que trascienden el ámbito donde se generan u originan.

Las jurisdicciones que integran el país -con la excepción del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego- tienen estructurados uno o más Institutos o Cajas para administrar regímenes de previsión social para sus empleados públicos provinciales y municipales.

Además, existen -en once de las provincias argentinas- entidades de características propias organizadas para administrar regímenes que amparan personas dedicadas a determinadas actividades profesionales.

En general, se encuentran estructurados regímenes diferenciados para docentes, magistrados, funcionarios judiciales y personal de seguridad, observándose que en la Provincia de Buenos Aires ha sido creada una entidad cuyo cometido específico es la administración del régimen de retiros, jubilaciones y pensiones para el personal de la policía; régimen al cual se halla asimilado el personal que presta servicios en establecimientos penales, aunque su administración está a cargo del Instituto de Previsión Social de la mencionada Provincia.

En su gran mayoría las entidades previsionales son instituciones autárquicas con personería jurídica e individualidad económico-financiera, y mantienen su relación con el Poder Ejecutivo -cuando se trata de organismos provinciales- a través del ministro del ramo que indica la ley de ministerio vigente en cada jurisdicción.

El gobierno y administración de estas instituciones está a cargo, en general, de un cuerpo colegiado que contempla la representación a través de las organizaciones representativas de los afiliados activos y beneficiarios, conjuntamente con los representantes del Estado.

En cuanto a aquellas entidades que administran regímenes que amparan a personas dedicadas a determinadas actividades profesionales, la composición del órgano directivo está determinada, en algunos casos, mediante la designación de sus miembros por elección directa de sus propios afiliados; en otros casos, por designación del Poder Ejecutivo o por los propios miembros de las instituciones de la colegiación.

Las personas en relación de dependencia del sector público provincial y municipal, están protegidas -en general- cualquiera sea su situación contractual, exceptuándose en algunos casos, cuando se trate de locación de obra o sean consecuencia de cargos electivos y funcionales, a quienes se acuerda la posibilidad de optar por la afiliación.

Es importante destacar que la mayoría de los regímenes excluye a los menores de 18 años, aunque existen otros que llevan este límite a los 16 años, o no lo establecen. Para los regímenes de profesionales la obligatoriedad de la afiliación se relaciona normalmente con la matriculación o el ejercicio profesional.

En materia de los recursos para la financiación de los programas de prestaciones, los organismos del sector público han eliminado -con excepción de los regímenes que amparan al personal de seguridad- el aporte del empleador sustituyéndolo por el régimen de coparticipación impositiva, por adhesión a lo establecido por la Ley Nacional Nro. 22453. Tal situación generó algunas situaciones y circunstancias no deseadas, ya que en algunas jurisdicciones esta modificación dio cabida a incumplimiento de las transferencias en término de los importes percibidos como consecuencia de la operatoria indicada en dicha ley, en razón de anteponer otras prioridades económico-financieras de la propia administración provincial.

En forma genérica, el nivel de los aportes personales para los servicios considerados comunes -cuando se trata del financiamiento de las prestaciones para el personal del sector público- están establecidos en porcentajes que oscilan entre el 10 o/o y 14 o/o, salvo para aquellos regímenes de creación más reciente, en donde el nivel de aportes que establece por debajo del 10 o/o, llegando incluso al 5 o/o (para las jurisdicciones: Misiones y Municipalidad de la Ciudad del Neuquén). En cuanto a los servicios docentes, los aportes se incrementan en hasta tres puntos, con excepción de las jurisdicciones de: Misiones, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe (que requieren porcentajes aumentados respecto de los servicios comunes en: 8 y 5 puntos, respectivamente).

Los regímenes referidos al personal de seguridad tienen establecido, por su parte, aportes personales comprendidos en valores que van del 13 o/o al 16 o/o, con excepción de: Buenos Aires (18 o/o), Salta y La Rioja (17 o/o) y Santa Cruz (10 o/o). Como para este régimen subsiste el aporte patronal, estos se establecen en valores que oscilan como mínimo en el 1 o/o más -Salta y Santiago del Estero- y en un máximo del 6 o/o -La Pampa y Córdoba-. Como dato de interés se consigna que el régimen de la Provincia de San Juan -según la legislación consultada- no tiene establecido porcentaje alguno para este rubro (las diferencias entre la recaudación por aportes personales y las erogaciones son asumidas con fondos del Tesoro Provincial).

En cuanto a los regímenes que amparan a personas dedicadas a determinadas actividades profesionales existen varias formas de composición de los ingresos provenientes de los propios afiliados; que se integran básicamente de: aportes directos sobre honorarios percibidos o presuntos, porcentajes sobre monto de la jubilación ordinaria mínima, aportes fijos por categorías o alguna clasificación similar.

Algunos regímenes de previsión para empleados públicos fijan el aporte del primer mes o primer aumento con destino al organismo respectivo.

En lo que hace al concepto remuneraciones, la casi totalidad de la legislación de los organismos del sector público consultada ha previsto una definición de este rubro en forma similar a la establecida por la Ley Nacional Nro. 18037, incluídas las excepciones que en la misma ley se señalan.

Respecto a los procedimientos para la recaudación de los ingresos, existen claras diferencias entre la operatoria de los organismos del sector público y las entidades para profesionales. En el primer grupo, la percepción se materializa a través de un procedimiento de descuento automático -para el aporte personal- al momento de pagar las remuneraciones mensuales, siendo los plazos establecidos para depositar las sumas pertinentes entre 5 a 30 días de dicho evento.

La mayoría de las legislaciones de entidades del sector público tienen previstos métodos compulsivos para la percepción de los recursos previendo el caso que los organismos o agentes responsables de depositarlos no lo hicieran. A tal efecto, están facultados a solicitar a las entidades administradores de impuestos la deducción y retención de las sumas que adeuden.

En cambio, la recaudación de los aportes fijados para financiar los regímenes de los profesionales presentan particularidades muy específicas; esto conlleva, necesariamente, montar una estructura administrativa adecuada a estos requerimientos propios (y, muchas veces aún este esfuerzo puede ser insuficiente para garantizar un cabal cumplimiento en la obligatoriedad de los aportes respectivos).

Las legislaciones de las entidades previsionales, en general, cuando se refieren a la administración de las sumas que constituyen sus respectivas reservas, determinan normas que favorezcan la consolidación del patrimonio, sin perder de vista el mejoramiento de todos aquellos aspectos que hacen a los objetivos de la seguridad social. Además, sólo en algunos casos, se han incorporado normas para regular los aspectos que se relacio-

nan con el equilibrio económico-financiero, previéndose la obligación de constituir fondos de reserva, y aún de realizar periódicos estudios actuariales que posibiliten plantear los ajustes o correcciones pertinentes.

Es importante consignar que la casi totalidad de los organismos consultados presentan en su legislación enunciados que establecen la obligatoriedad de efectuar estudios periódicos para analizar las tendencias del régimen. Si bien tales postulados son cumplimentados por algunas jurisdicciones, en general es muy escaso el material elaborado y además, el mismo no siempre muestra criterios uniformes en el tiempo.

Son heterogéneos los discernimientos que utilizan las entidades encuestadas para mostrar cuantitativamente la evolución que experimentan globalmente los regímenes administrados, por lo que, los datos resultantes difícilmente pueden ser compatibilizados para obtener una visión de conjunto.

Básicamente los datos con que se elaboran las series estadísticas se remiten a señalar el comportamiento de los beneficios otorgados en forma general, en algunos casos, y con aperturas por sectores o tipo de beneficios, en otros. Por lo demás no existen datos compilados de activos que permitan contar con la composición: por edades, por antigüedad, por sexo, por tramos de remuneraciones, por clase de servicios, etc. Para los beneficiarios, si bien existen mayores posibilidades de obtener datos que permitan construir cuadros o series estadísticas -por cuanto los elementos de base se encuentran en el propio organismo- salvo contadas excepciones, no existen cuadros o indicadores que muestren datos relacionados con: tipo de prestación, edad al jubilarse, edad al fallecer, composición del grupo pensionario, clase de servicios que motivó la prestación, sexo, tramo de haberes, cargas familiares, etc.

La carencia de algunos datos básicos o selectivos en materia del universo (aportantes y beneficiarios) constituyó una restricción para profundizar el análisis técnico; fue obviado, en parte, con la ayuda de elementos informativos auxiliares de censos nacionales, de las distintas dependencias provinciales y de los propios organismos previsionales.

En cuanto a los datos básicos referidos a los componentes económico-financieros y presupuestario-patrimoniales, cabe destacar que el material existente en cada una de las entidades visitadas cumplimentaba en gran parte las necesidades planteadas, aunque algunos estados adolecen de falencias en cuanto al tratamiento particularizado de ciertos rubros patrimoniales que imposibilitaron un estudio más exhaustivo.

Como conclusión de lo aquí expuesto, surge la imperiosa necesidad de elaborar pautas que permitan obtener una producción sistemática de aquellos datos e informes periódicos -herramienta idónea para que los responsables de la administración de los regímenes previsionales cuenten con oportuna información- que posibiliten la toma de decisiones en forma más técnica y racional.

A tal efecto, el Anexo "A" de esta Etapa presenta una batería de cuadros básicos mediante los que se puede sistematizar y consolidar los actuales esfuerzos en la materia, con el objetivo claro de perfeccionar el relevamiento de la información necesaria y en especial, para hacerla accesible a todos los interesados en conocer y evaluar el desarrollo de la previsión social.

En materia de gastos de administración, no todas las legislaciones consultadas tienen prevista expresamente la forma en que acotarán sus gastos de funcionamiento, aunque aquellas que así lo contemplan, lo hacen a través de determinados porcentajes en función de los recursos.

La mayoría de los regímenes analizados reconocen el pago a sus beneficiarios de las denominadas "asignaciones familiares", pero no en todos los casos los importes son iguales a los que perciben las personas en actividad. Complementariamente, existen organismos con normas relativas a otras prestaciones sociales, tales como: gastos de entierro, devolución de aportes -total o parcial- a los causa-habientes sin derecho a pensión de afiliados fallecidos, servicios asistenciales, etc.

Respecto del programa de prestaciones previsionales, genéricamente, las que están previstas en los regímenes para el personal del sector público provincial y municipal, son las siguientes:

- Jubilación ordinaria;
- Jubilación por edad avanzada;

- Jubilación por invalidez, y
- Pensión.

Existen, asimismo, legislaciones locales que tienen previsto un beneficio al que denominan "jubilación extraordinaria" -en algunos casos- o por "retiro voluntario", en otros. En tanto las entidades que amparan a personas dedicadas a determinadas actividades profesionales establecen beneficios similares, aunque con algunas particularidades y contemplan también, otras prestaciones asimilables a subsidios, originados en hechos sociales de características específicamente definidas.

Para el personal de seguridad, los beneficios establecidos son, genéricamente: retiro obligatorio -por causales taxativamente previstas que incluye la invalidez-, retiro voluntario y pensiones, con previsiones especiales para el caso de fallecimiento o incapacidad en acto de servicio.

En virtud del análisis de las normas compiladas se puede inferir algunas consideraciones en materia de las condiciones para la jubilación ordinaria. En tal sentido, la totalidad de los organismos del sector público fueron adecuando -en el tiempo- los requisitos mínimos de edad y años de servicios para acceder a esta prestación por parte de las personas que prestan servicios comunes. Tal es así que, actualmente, con la excepción de muy pocos regímenes, las exigencias son: 60 años de edad para los varones y 55 para las mujeres, y 30 años de servicios para ambos sexos (requisitos iguales a la legislación nacional para el personal en relación de dependencia -Ley Nacional Nro. 18037). Las excepciones se presentan en las siguientes jurisdicciones y regímenes: Provincia de Buenos Aires (único régimen que exige 35 años de servicios de los cuales como mínimo 22 deben serlo con aportes); Provincia de Córdoba: 58 años de edad para los varones; Provincia de Mendoza: 62 años de edad para ambos sexos; Chubut 55 años de edad para ambos sexos; Santa Cruz 57 años de edad para los varones y para las mujeres 52 años de edad y 27 años de servicios; algunos regímenes municipales que tienen requerimientos inferiores, tanto de edad como de años de servicios; y la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires: 50 años de edad para ambos sexos.

Conjuntamente con los requisitos enunciados, la gran mayoría de los regímenes establecen una cláusula exigiendo dentro del límite de servicios el cómputo de una cantidad mínima de años prestados bajo la vigencia de los respectivos regímenes o sea de los llamados "servicios con aportes". En este sentido, se ha establecido en 15 años el límite, pero en jurisdicciones como Santa Fe, Córdoba y La Rioja, alcanza a 23 años o en Buenos Aires, Misiones y Chubut: 22 años, y finalmente se encuentran: La Pampa, Formosa y Jujuy, donde ese requisito es de 20 años.

En lo que se refiere a las Cajas para personas que desempeñan tareas profesionales se observa una gran similitud en las condiciones que se recaban para el derecho a la jubilación ordinaria y que se establecen en 60 años de edad y 30 años de ejercicio profesional, quedando solo excepciones a esta generalidad.

Respecto a la jubilación por edad avanzada, se observa una igualdad de requisitos cualquiera fuere el sexo del afiliado y se establecen, en la mayoría de los casos, en 65 años de edad y diez años de servicios computables con el requisito de no menos de cinco de esos años dentro de los últimos ocho años inmediatos anteriores al cese. Sin embargo no todos los regímenes tienen previsto en sus legislaciones este tipo de prestación, pudiendo destacar su inexistencia, entre otras, en el régimen general de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la jubilación por invalidez, es una preocupación creciente de muchos de los regímenes de previsión social el incremento que se produce en el otorgamiento de beneficios por esta causa o en el aumento de la incidencia de estos sobre el total de erogaciones mensuales por prestaciones, tal como ya se ha manifestado en el Capítulo II.

Esta circunstancia mueve a examinar las causas que pueden dar origen a esta situación.

Sin duda, la modificación de la edad para la jubilación ordinaria y la desaparición casi total en las legislaciones provinciales para los agentes del sector público, de los retiros voluntarios que exigían menores edades que las establecidas para la jubilación ordinaria, producen por lógica consecuencia una mayor demanda de jubilaciones por invalidez. Esto es así, por cuanto al continuar en la nómina de activos un mayor número de personas, con mayores edades, aumentan también las posibilidades de invalidarse.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Pero quizá la búsqueda de una razón determinante puede centrarse en la rigidez de las normas vigentes sobre el tema.

Por un lado, se determina una abrupta división entre quien está "totalmente" incapacitado para trabajar y quien está "totalmente" habilitado para ello. La fijación del porcentaje del 66 o/o de disminución de la capacidad laborativa como incapacidad total indicada como límite, en general, señala que quien está por debajo de ella, cualquiera sea el nivel, no encuentra en el régimen previsional una cobertura equivalente a la disminución física o psíquica que padezca. Y no es necesario demostrar que a partir de un porcentaje muy inferior al 66 o/o mencionado, existe en el causante un doble deterioro económico. El que resulta del costo de atención sanitaria de esa disminución física y el consecuente de la menor capacidad de producir ingresos con motivo de esa disminución.

Esta circunstancia flexibiliza el criterio de quienes, ante situaciones próximas a los límites, deben decidir si corresponde o no dilucidar la procedencia de estos beneficios.

Además es común que el régimen, una vez otorgado el beneficio, solo intervenga en el pago de los haberes mensuales, desentendiéndose de las prestaciones de medicina readaptadora o rehabilitadora, que habría de permitir en muchos casos el reintegro del incapacitado a las filas del sector productivo.

En casi todos los casos el haber de la jubilación por invalidez equivale al de la jubilación ordinaria.

Por último y a fin de detallar una falencia más de la legislación en este sentido, debe señalarse que tampoco se diferencia, por lo general, la incapacidad que presenta quien pueda deambular y quienes, necesariamente, precisan de una tercera persona para el cumplimiento de sus necesidades más vitales.

En pocos casos, se encuentran exigencias particulares para que el fallecimiento en actividad de un afiliado no origine derecho a pensión. A partir del primer día de actividad del trabajador en relación de dependencia tiene la cobertura del riesgo de muerte, lo mismo que el afiliado jubilado o con derecho a jubilación, que al fallecimiento, generan para sus derecho-habientes, expresamente determinados, la prestación pensionaria.

Los familiares con derecho a este beneficio son, con carácter privilegiado, los que integren el grupo familiar directo; sea la esposa (sin condiciones) o el esposo incapacitado para el trabajo; los hijos menores, o mayores incapacitados; los padres en determinadas condiciones; los nietos y hermanos del causante. Existe en todos los casos un orden excluyente, que al operar el derecho en la esposa y los hijos elimina el resto de los familiares. Debe señalarse especialmente, la aparición en algunas legislaciones del derecho a la concubina que haya mantenido unión con el causante con todas las particularidades de un matrimonio formal, como también, el derecho a la esposa casada con impedimento de ligamen en países cuyas leyes autorizan la separación legal y el nuevo matrimonio. También son singulares las normas de las jurisdicciones que fijan durante un período limitado e inmediatamente posterior al fallecimiento del causante el mantenimiento del 100 o/o del haber jubilatorio que gozaba o le hubiera correspondido al fallecido, o el incremento del haber pensionario en proporción al aumento de los copartícipes del beneficio.

Para los beneficiarios de jubilaciones existen incompatibilidades totales o limitadas para el desempeño de actividades en relación de dependencia exceptuándose en todos los casos las tareas docentes o de investigación de nivel universitario.

En los regímenes de profesionales de incompatibilidad con el goce del beneficio de jubilación ordinaria, sólo se refiere al ejercicio de la profesión.

En cuanto a la determinación del haber en los regímenes del sector público, se utilizan promedios de una porción de la actividad de los agentes. Estos promedios pueden ser de remuneraciones actualizadas mediante índices o con el método de la "correlación de cargos".

Para la jubilación ordinaria y por invalidez, sobre ese promedio se aplican porcentajes que van generalmente del 70 o/o al 82 o/o.

También existen disposiciones que incrementan el promedio fijado en estos casos en el 70 o/o si el agente

permanece en actividad durante un período no menor a tres años, luego de haber alcanzado las condiciones mínima indicadas para demandar la jubilación ordinaria.

El haber de la jubilación por edad avanzada se determina aplicando un porcentaje menor, o se reduce proporcionalmente el haber determinado en la forma prevista para la jubilación ordinaria.

Las Cajas para profesionales fijan en algunos casos, los montos de los beneficios en función de sus posibilidades económico-financieras o en otros, tomando parámetros ajenos a su propio régimen, tal como las remuneraciones correspondientes a los miembros de los Tribunales de Justicia. Y por último también existen organismos que utilizan métodos más técnicos, teniendo en cuenta los aportes realizados, la edad y fecha en que fueron efectivizados; tal el caso de la Caja de Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Entre Ríos.

La movilidad de las prestaciones está consagrada en todos los regímenes del sector público, en forma concordante con los incrementos del personal en actividad comprendido. Se efectiviza mediante la aplicación de coeficientes surgidos de los incrementos generales acordados al personal en actividad o por el método de la "correlación de cargos" (que significa ajustar cada beneficio de acuerdo con el nivel salarial equivalente a un cargo en actividad).

Los organismos para el sector profesional adecuan las prestaciones en función de decisiones de los órganos de conducción o por actualización de escalas o modificación de valores, de puntos o módulos.

A medida que se fue ampliando el número de sectores amparados por regímenes de previsión social -mediante la creación de organismos específicos para cada uno de ellos- surgió la necesidad de facilitar a los interesados el traslado, a la Caja que asumiera el rol otorgante del beneficio, los servicios y sus correspondientes aportes, acumulados en otros regímenes.

Mediante el dictado del Decreto-Ley Nacional Nro. 9316/46 y la adhesión posterior a sus normas de las distintas jurisdicciones del país, se conformó lo que se denomina "régimen nacional de reciprocidad", dándose con ello una respuesta adecuada, para ese momento, al problema planteado.

Al ir modificándose, con el transcurso del tiempo, las condiciones originales, sumándose a ello las realidades que surgían de la aplicación práctica de las normas dictadas, se fue evidenciando la necesidad de encarar -por lo menos- la adecuación de dos temas.

El primero de ellos y referido a la manera de determinar qué Caja o Instituto debía asumir el rol otorgante de la prestación fue motivo de dos correcciones, una mediante la Ley 14.370 y posteriormente la producida por la Ley Nro. 18.037, actualmente en vigencia.

El segundo, de fundamental importancia para la mayoría de las jurisdicciones provinciales, está referido a la contraprestación económica que recibe el organismo jubilador por parte del o de los organismos reconocedores de servicios.

El método original, de transferencia capitalizada de los aportes y contribuciones efectuados, fue en su origen una respuesta válida a esta cuestión. Pero en la misma medida que con el correr del tiempo se modificaban las condiciones económicas, se deterioraba el resultado de esas transferencias, con respecto a la erogación resultante del pago total del beneficio.

Este desequilibrio llegó a tal proporción que en la citada Ley Nro. 18.037 se suprimió la transferencia de aportes por los reconocimientos de servicios. Varias jurisdicciones adhirieron a esta nueva disposición, pero otras, más por una cuestión de mantenimiento de principios que por el valor económico resultante, conservaron el método de transferencia.

Este método de transferencia de los importes recaudados oportunamente por cada régimen reconocedor de servicios y un idóneo mecanismo de actualización que adecuara el valor de las mismas al de la prestación jubilatoria o pensionaria, constituyó una preocupación de larga data y motivó una serie de propuestas aprobadas por las entidades provinciales en el marco de las cuatro Jornadas Interprovinciales Técnico-Administrativas de Previsión Social realizadas entre los años 1969 a 1972.

Existe un nuevo hecho que puede impulsar a un replanteo integral de "la reciprocidad" y es el producido por el convenio suscripto entre las Cajas Provinciales de Previsión Social para Profesionales y la Subsecretaría de Estado de Seguridad Social, hoy ratificado por la mayoría de los gobiernos provinciales involucrados. Con su aplicación cada reconocimiento de servicios lleva implícito, para la caja participante, el pago parcial de la prestación y en proporción al tiempo reconocido.

En síntesis, la falta hasta el momento, de una actualización de los aportes y contribuciones transferidos o, la adecuación de las obligaciones de las Cajas reconocedoras de servicios, ha beneficiado a algunas de ellas en detrimento de otras. Entre las primeras podemos señalar a los regímenes administrados en el ámbito nacional y, entre las otras, a la mayoría de las jurisdicciones provinciales.

Sin duda esta ha sido una de las causales del deterioro que han debido soportar muchos de los regímenes en cuestión. Algunos de ellos, como el caso de la Provincia de Buenos Aires, intentaron dar al tema una solución dentro de su legislación (Ley Nro. 6469), sin obtener el resultado esperado, ya sea por no haber encontrado eco en otros regímenes o como consecuencia de decisiones judiciales emanadas de su propio ámbito.

El análisis de estas cuestiones y la sugerencia de propuestas alternativas para cada una de ellas se presenta como un imperativo en el desarrollo de este trabajo y se habrá de materializar en las Etapas siguientes.

Los distintos organismos que administran regímenes de previsión social han sido demandados, en forma reiterada, por quienes peticionan presuntos derechos vulnerados o se consideran agraviados por normas o legislaciones de aplicación general, especialmente las que se refieren a "determinación del haber" y a la "movilidad de las prestaciones".

Estas demandas son interpuestas, en las jurisdicciones provinciales, ante los más altos Tribunales de Justicia, integrados en su mayoría por juristas de prolongada actuación en algunas de las ramas del derecho.

Pese a que el resultado de la contienda judicial en principio sólo es de aplicación para el caso resuelto, podemos agrupar los juicios en: los de alcance limitado al interesado y los que tendrán implicancia a nivel general.

Dentro de estos últimos podemos citar el "caso Ibañez Frocham, Manuel" (en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires) beneficiario del Instituto de Previsión Social que accionó contra las disposiciones de la legislación vigente relativas a escalas de reducción aplicables al haber de las jubilaciones. La Suprema Corte de Justicia --integrada por jueces ad-hoc-- dispuso al respecto que toda reducción superior al treinta y tres por ciento (33 o/o) del cargo considerado para la determinación del haber jubilatorio, era confiscatoria. En resumen, este fallo sentó precedente como jurisprudencia constante e incluso la propia legislación debió adoptar el porcentaje del 67 o/o (del cargo en actividad) como mínimo del haber jubilatorio.

Otro caso ha sido el reciente fallo en la Provincia de Tucumán que se refiere a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nro. 5.066. Esta ley dispone que los beneficios otorgados con anterioridad a la sanción de la Ley Nro. 4.882 son actualizados con aplicación del 70 o/o de la remuneración vigente del cargo considerado. Debe destacarse que los beneficiarios de la mencionada Ley Nro. 4.882 perciben sus haberes con aplicación de este porcentaje, en tanto los anteriores percibían el 82 o/o.

Para no abundar en detalles se habrá de citar, por último, la demanda en jurisdicción de la Provincia de Catamarca, caso Valdez, Ramón Arturo contra el Decreto Nro. 1507/79 y la Ley Nro. 3.227. El juicio fue planteado en razón de sentirse agraviado por cuanto su haber jubilatorio se reajustaba con métodos que alteraban la base de cálculo de los sucesivos reajustes, provocando haberes inferiores a los que --entendía-- debían corresponderle. Este fallo fue resuelto favorablemente por la Suprema Corte de la Nación.

Como podemos notar en estos tres casos se han resuelto presentaciones individuales que luego tendrán gran incidencia en todo el universo.

Sin intención de emitir opinión sobre la procedencia jurídica de estos fallos, es evidente que su dictado altera las bases del equilibrio económico de cada régimen. Ello mueve a señalar la conveniencia de ilustrar adecuadamente desde el punto de vista técnico-económico y social a quienes deben expedirse sobre las implicancias

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

que afectan el régimen respectivo con la adopción de determinadas posiciones.

De esta manera no sólo se estará en condiciones de ampliar las garantías a todos los factores en juego, sino también contemplar adecuadamente los intereses individuales, de la comunidad y las consecuencias finales de cada una de las demandas interpuestas.